

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 308 del Código Civil del Estado de Nuevo León, con la finalidad de garantizar todo aquello considerado como alimentos a los menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

Diputada Lorena de la Garza Venecia

**Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de
Nuevo León. LXXVII Legislatura.**

P r e s e n t e.



La suscrita Diputada **Anylú Bendición Hernández Sepúlveda**, **Integrante del Grupo Legislativo MORENA** en la LXXVII Legislatura del Congreso del Estado, con base en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía iniciativa de reforma al **Código Civil del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Los alimentos es un derecho que tienen todos los acreedores alimentarios por parte de sus deudores exista o no un vínculo entre el progenitor y la persona gestante, esto debe incluir la educación básica, media y poder otorgarles la enseñanza de alguna profesión y oficio.

Nuestra Constitución reconoce el derecho a la alimentación en el Artículo 4: "Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”¹ Este derecho es indispensable para toda persona, no solo implica el poder sobrevivir, también influye el poder desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida para los grupos que son vulnerables.

La obligación de dar alimentos en primer lugar es de los padres hacia sus hijos y viceversa, esto representa que a la mayoría de edad o hasta que terminen sus estudios según sea el caso, se extingue esta obligación.

Pero en casos de situación de una relación matrimonial, con datos del INEGI, indica en estudios realizados en el 2022, al momento de un divorcio y se les sea asignado la pensión alimenticia a los hijos e hijas a la o al cónyuge, solo se asignó en un 42.3% de los casos, quedando más de la mitad de menores de edad si recibir alguna pensión siendo un derecho el poder recibirlos haya o no alguna resolución que te lo exija.²

Sin embargo, desde las posibilidades de los deudores, solo otorgan cierta cantidad que en muchas ocasiones no es suficiente y que, a su vez, no abarca la situación de solventar los gastos durante el embarazo y al momento del parto siendo cónyuges, exista o no alguna relación o concubinato, e incluso, en casos de las personas adultas mayores se inhiben de poder solventarlos.

La persona gestante requiere de cuidados especiales que deben ser garantizados y reconocidos como un derecho de adquirirlos, el presunto

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx)

² [Divorcios2022.docx](https://divorcios2022.docx) (live.com)

padre de su hija, hijo o ambos, les debe proporcionar lo que sea necesario para solventar los alimentos, incluyendo asistencia médica o hospitalaria, durante el embarazo y después de este, así como también lo considerado como el parto y en su caso, si existiendo una complicación medica durante o después y todo lo demás que implique de cuidados.

Así mismo, desde el Gobierno Federal se han asegurado que las personas adultas mayores se les brinde un apoyo económico desde la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” la cual les permite tener una estabilidad en su vida económica, sin embargo, aunque cuentan con un apoyo económico, la mayoría de ellos no pueden solventar gastos de cuidados por parte de personal médico y buscan el auxilio por parte de familiares para poder realizar actividades las cuales por si mismos se les llegue a dificultar en su día a día.

Por ello, considero necesario implementar en nuestro marco legal el reconocimiento de los conceptos que también deben de ser considerados como alimentos y así mismo, garantizarlos para que no exista lagunas legales que no protejan a los grupos vulnerables.

La presente iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Nuevo León tiene como finalidad el garantizar todo aquello considerado como alimentos a los menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores y poder demandar su derecho a percibir un a calidad de vida digna.

DECRETO

Artículo único: Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 308 del **Código Civil del Estado de Nuevo León** para quedar como sigue:

Art. 308.- Los alimentos comprenden la manutención en general que incluye entre otros, la comida, el vestido, la habitación y la salud, la hospitalaria y en su caso, **los gastos de embarazo y parto**. Respecto de los menores de edad, los alimentos comprenderán además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su edad y circunstancias personales, lo cual también deberá considerarse respecto de los mayores de edad, cuando el caso así lo amerite.

Cuando el acreedor alimentista tenga alguna discapacidad temporal o permanente, los alimentos incluirán también, los gastos en higiene, asistencia personal, rehabilitación y los de traslado cuando la persona requiera acudir a recibir atención derivada de la misma; y en general, todo aquél gasto originado con motivo de la discapacidad.

Cuando se trate de personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se le proporcione, integrándolos a la familia y en su caso, también se comprenderá los gastos funerarios.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León a febrero de 2025


Diputada Anylú Bendición Hernández Sepúlveda

Integrante del Grupo Legislativo MORENA

H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXVII Legislatura



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE. C. DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presentan iniciativa de reforma a los artículos 8 y 70 de la Ley de Movilidad Sostenible de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, en relación a establecer una tarifa única en el transporte público.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): MOVILIDAD

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

—

DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
P R E S E N T E.-

El suscrito, Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional de la LXXVII Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 96 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 102, 103, 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, iniciativa por la que se reforma la fracción CXIV al artículo 8 y se adiciona una fracción XI del artículo 70 de Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial Para el Estado de Nuevo León al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad es un derecho fundamental que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que garantiza el acceso a oportunidades de empleo, educación, salud y recreación. Este derecho está reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que establece la movilidad sostenible como un pilar clave para el desarrollo urbano y la reducción de desigualdades.

En el Estado de Nuevo León, el sistema de transporte público es utilizado diariamente por aproximadamente un millón de personas, siendo una herramienta clave para el desarrollo social y económico de la región. Sin embargo, los altos costos del transporte público representan una carga significativa para los ciudadanos, especialmente para aquellos de menores ingresos. Actualmente, los usuarios del transporte en el Área Metropolitana de Monterrey deben realizar múltiples pagos al utilizar diferentes medios de transporte, lo que incrementa su gasto diario en movilidad.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, una persona que depende completamente del transporte público puede gastar entre el 15% y el 25% de su ingreso mensual en desplazamientos, afectando su capacidad de cubrir otras necesidades básicas como alimentación y vivienda.

La falta de un esquema tarifario justo también contribuye a la desigualdad social, ya que limita el acceso de las personas a oportunidades laborales y educativas. Además, el uso excesivo del transporte privado debido a la falta de incentivos para utilizar el transporte público ha incrementado los niveles de congestión vehicular y contaminación en la zona metropolitana, generando un impacto negativo en la calidad del aire y la salud de la población.

A nivel internacional, países como Alemania, Austria, España y Hungría han implementado con éxito tarifas únicas en el transporte público, lo que ha demostrado ser una medida efectiva para incentivar el uso del transporte colectivo, reducir costos para los usuarios y mejorar la movilidad urbana.

En Alemania, por ejemplo, el programa "Deutschlandticket" permite a los ciudadanos utilizar todos los medios de transporte público por una tarifa fija mensual, lo que ha llevado a un incremento significativo en el número de pasajeros y una reducción del tráfico vehicular.

En este contexto, la creación de una tarifa única en el Estado de Nuevo León, la cual permitiría que los usuarios paguen una sola vez al día por el acceso ilimitado a todas las modalidades de transporte público. Esta medida beneficiaría directamente a miles de ciudadanos al reducir sus costos de movilidad, fomentar el uso del transporte público y disminuir la congestión vial y la emisión de contaminantes.

La implementación de una tarifa única no solo es una medida de justicia social, sino que también representa una estrategia clave para el desarrollo urbano y económico del estado. Al reducir la carga económica en los ciudadanos, se fortalece su capacidad de acceso a oportunidades laborales y educativas, mejorando su calidad de vida.

Asimismo, se fomenta el uso del transporte público como una alternativa viable y eficiente frente al vehículo particular, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y mejorando la movilidad en el Área Metropolitana de Monterrey.

Con la adopción de este esquema tarifario, Nuevo León se coloca a la vanguardia en materia de movilidad sostenible, garantizando un sistema de transporte más accesible, eficiente y equitativo. Es momento de tomar decisiones que beneficien a toda la población y permitan construir una ciudad más justa, competitiva y con mejor calidad de vida para los neoloneses.

Es por lo anteriormente expuesto que acudimos a esta soberanía a presentar el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. - Se reforma la fracción CXIV al artículo 8, y se adiciona una fracción XI al artículo 70 de Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 8.

del I al CXIII ...

CXIV. Tarifa Única Diaria: Costo del pasaje que permitirá a los usuarios del transporte público, mediante una aplicación digital o cualquier medio que establezca la presente Ley y su Reglamento, para acceder de manera ilimitada a todas las modalidades de transporte en el Estado de Nuevo León diariamente por un solo pago, garantizando que los usuarios puedan trasladarse desde su origen hasta su destino.

Artículo 70. Son derechos de los usuarios del servicio de Transporte Público:

XI. A gozar el acceso a la tarifa única diaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO. - Se concede al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León para que, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto, establezca en sus respectivos reglamentos los mecanismos técnicos y operativos necesarios para la implementación de la Tarifa Única.

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su presentación.

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.



Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores



Myrna Isela Grimaldo Iracheta

Diputada local



Mauro Guerra Villarreal

Diputado local



Cecilia Sofía Robledo Suárez

Diputada local



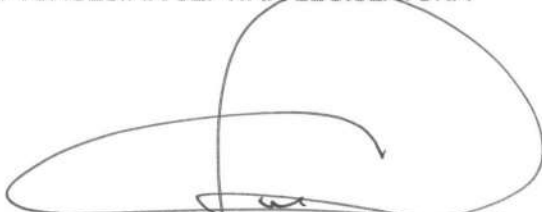
Miguel Ángel García Lechuga

Diputado local



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA




Claudia Gabriela Caballero Chávez

Diputada local


José Luis Santos Martínez

Diputado local


Itzel Soledad Castillo Almanza

Diputada local


Aile Tamez de la Paz

Diputada local


Ignacio Castellanos Amaya

Diputada Local



Iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, en materia de Tarifa Única Diaria.

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de una fracción IX Bis al Artículo 21 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor



DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -

El suscrito **Diputado Mauro Guerra Villarreal** e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta soberanía a proponer el siguiente proyecto de decreto por el que se **ADICIONA** la fracción IX BIS al artículo 21 de la **LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de un sistema democrático en una sociedad cada vez más informada y exigente, garantizar el acceso a la información pública no es solo una obligación jurídica, sino un compromiso ético que fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

En este contexto, el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León tiene un papel estratégico como organismo público descentralizado dedicado a la difusión de contenidos de interés social, cultural y gubernamental.

Sin embargo, su potencial para consolidarse como un puente entre los ciudadanos y el gobierno aún puede ser aprovechado al máximo mediante una programación

Iniciativa en materia de equidad de contenido en Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



que incluya de manera integral y con equidad las actividades de los tres Poderes del Gobierno del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, buscando garantizar que este medio sea un enlace para la transparencia gubernamental y el fortalecimiento de la democracia, es decir con pluralidad.

La inclusión de las transmisiones de las sesiones, comisiones y/o actividades en lo general del Congreso del Estado, los informes y comparecencias del Poder Ejecutivo, así como las resoluciones relevantes y sesiones del Pleno del Poder Judicial, permitiría a los ciudadanos conocer de manera directa y sin intermediarios el funcionamiento de sus instituciones.

Esto no solo fomenta un gobierno más abierto y cercano, sino que también habilita a la ciudadanía para ejercer un escrutinio informado sobre sus autoridades y representantes.

Asimismo, el incluir estas participaciones por este Sistema, se reconoce la importancia de garantizar que las transmisiones se realicen bajo principios de objetividad, imparcialidad y accesibilidad; esto implica que los contenidos deberán presentarse sin ediciones que puedan alterar su significado original, asegurando así que la información llegue de manera íntegra a la ciudadanía.

Además, se prevé que el Sistema coordine esfuerzos con las áreas de comunicación de los tres Poderes, lo cual no solo optimizará los recursos disponibles, sino que también garantizará la calidad y oportunidad de las transmisiones, considerando la necesidad de mantener un equilibrio en la programación, de forma que las actividades de los tres Poderes se integren sin desplazar otros contenidos fundamentales que de igual manera fomenten la cultura, la educación y el desarrollo social.

**Iniciativa en materia de equidad de contenido en Sistema de Radio y Televisión de
Nuevo León**



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



Esta visión integral asegura que el Sistema de Radio y Televisión continúe siendo un espacio plural y diverso, pero ahora integrando un enfoque más robusto hacia la transparencia gubernamental y no solo cumpliendo con la premisa del libre acceso a la información gubernamental, sino que también refuerza su vocación de servicio público en un estado como Nuevo León, con una rica diversidad cultural y una ciudadanía participativa, así como también a la transparencia convirtiéndose en un catalizador para la construcción de un tejido social más sólido y consciente de sus derechos y deberes.

La propuesta responde a una necesidad contemporánea de innovación en los modelos de gobernanza, así como la implementación de esta reforma no solo posicionará a Nuevo León como un referente en la promoción de la transparencia a través de medios públicos, sino que también reafirmará el compromiso del estado con los valores democráticos y plurales

La televisión y la radio, como medios masivos de comunicación, tienen el poder de construir narrativas y conectar comunidades; aprovechar este potencial para acercar los tres Poderes del Estado a la ciudadanía es un paso fundamental hacia una sociedad más informada, participativa y democrática.

Es por lo anterior expuesto que, acudimos a esta Soberanía a presentar el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se **ADICIONA** la fracción IX BIS al artículo 21 de la **LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN** para quedar como sigue:

Iniciativa en materia de equidad de contenido en Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León

Artículo 21. Al Director General le corresponde lo siguiente:

I-IX.-...

IX BIS. Difundir con equidad de espacio y tiempos las actividades de los Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a efecto de que puedan difundir los contenidos que a su juicio convengan, respetando los principios rectores establecidos en esta ley.

Para estos efectos, deberá celebrar acuerdos o convenios de colaboración con el Poder que se trate, con la intención de establecer la forma y el tiempo en que se realizará la transmisión de los contenidos;

X-XXII.-...

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

MONTERREY, NUEVO LEÓN., A FEBRERO DEL 2025

Iniciativa en materia de equidad de contenido en Sistema de Radio y Televisión de
Nuevo León



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**DIP. CARLOS ALBERTO DE LA
FUENTE FLORES**

**DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO
ALMANZA**



DIP. AILE TAMEZ DE LA PAZ

**DIP. CLAUDIA GABRIELA
CABALLERO CHÁVEZ**

**DIP. CECILIA SOFÍA ROBLEDO
SUÁREZ**

**DIP. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
LECHUGA**

**Iniciativa en materia de equidad de contenido en Sistema de Radio y Televisión de
Nuevo León**



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA




DIP. JOSÉ LUIS SANTOS
MARTÍNEZ

DIP. IGNACIO CASTELLANOS
AMAYA


DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO
IRACHETA



Iniciativa en materia de equidad de contenido en Sistema de Radio y Televisión de
Nuevo León

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): MOVILIDAD

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor



DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -

El suscrito **Diputado Mauro Guerra Villarreal** e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta soberanía a proponer el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III al artículo 25, se adiciona la fracción II.BIS a la fracción II del artículo 37 y se reforma la fracción II del artículo 38 a la **LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el estado de Nuevo León, el cambio de color de los vehículos representa un tema relevante que trasciende el ámbito estético o personal. Se trata de un asunto con implicaciones significativas en la seguridad pública, la administración eficiente de los registros vehiculares y la certeza jurídica de los ciudadanos. La ausencia de una normativa clara y procedimientos específicos para declarar el cambio de color de los vehículos ha generado un vacío que puede comprometer la capacidad de las autoridades para garantizar el orden y la seguridad en la entidad.

Cuando un vehículo cambia de color sin ser declarado ante las autoridades, se genera una discrepancia entre la apariencia física del automóvil y su registro oficial. Esta situación dificulta los esfuerzos de vigilancia y control, ya que los operativos de

seguridad dependen, en gran medida, de información precisa y confiable para identificar vehículos.

En un contexto donde la seguridad pública enfrenta grandes retos, permitir que estas modificaciones no sean debidamente registradas representa una vulnerabilidad que podría ser explotada por quienes buscan evadir la justicia.

Asimismo, los registros vehiculares son una herramienta clave para la planificación de políticas públicas, el diseño de estrategias de movilidad y la administración del transporte en general. Cualquier inconsistencia en los datos, como la falta de actualización sobre el color de los vehículos, puede comprometer la calidad de la información disponible y afectar la eficacia de las decisiones gubernamentales. La construcción de un sistema confiable y transparente requiere que todos los propietarios asuman la responsabilidad de mantener actualizados los datos de sus automóviles.

Desde la perspectiva ciudadana, declarar el cambio de color de un vehículo también tiene implicaciones importantes. No hacerlo podría generar problemas legales para los propietarios, como dificultades al momento de realizar trámites de compraventa, transferencias de propiedad o incluso en casos de aseguramiento. Además, en situaciones de robo, contar con un registro actualizado aumenta significativamente las posibilidades de recuperación del automóvil, ya que facilita la identificación por parte de las autoridades.

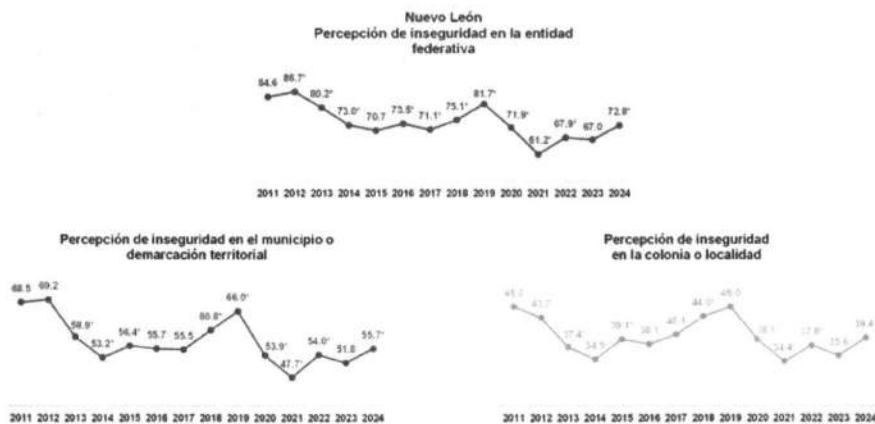
Por otro lado, es importante destacar que, en ocasiones, los cambios de color no declarados pueden ser utilizados como una estrategia por parte de grupos delictivos para evitar la detección. Un vehículo cuyo color no coincide con el registrado puede moverse con mayor facilidad sin levantar sospechas, complicando así el trabajo de las fuerzas de seguridad. En este contexto, regular y hacer obligatoria y gratuita la

declaración de este tipo de modificaciones contribuye directamente a fortalecer las capacidades de prevención y combate al delito.

En 2024, Nuevo León ha liderado 30 veces el conteo diario de muertes violentas y ocupa el quinto lugar nacional en lo que va del año en este rubro.

La extorsión también muestra un preocupante incremento: entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 se denunciaron 813 denuncias, la cifra más alta en 15 años.

Nuevo León se ha posicionado hoy en día como una de las entidades con mayor inseguridad en el país. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en materia de percepción de inseguridad estima que un 39.4% de la población de 18 años y más en el estado de Nuevo León considera que vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad, es inseguro. A nivel entidad federativa esta cifra es de 72.8%.



Nota 1: En 2020, se refiere al periodo de marzo, mientras que de 2011 a 2019 y de 2021 a 2024 de marzo - abril.

Nota 2: Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el levantamiento de la información de la ENVIPE 2020, con año de referencia 2019, se realizó del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 04 de septiembre.

* En estos casos **no** existe un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

Por otro lado, se ha tenido lugar un total de 23 mil 062 delitos que se relacionan al patrimonio. Los delitos que registraron en relación con el patrimonio son en situaciones de robo simple con un 9%, robo a algún negocio con un 13% y robo en

carretera con 36%, robo a institución bancaria con un porcentaje de 67%, 1% en robo a personas y un 8% fueron robos de vehículos.

Implementar una normativa clara y un procedimiento sencillo para declarar gratuitamente el cambio de color de los vehículos no solo es una medida técnica, sino un paso hacia la consolidación de un sistema más transparente, eficiente y seguro. Esta acción refleja un compromiso del estado con la protección de los ciudadanos, el fortalecimiento de la seguridad pública y la promoción de una cultura de legalidad entre la población. Por ello, no solo beneficiará a las autoridades, sino también a los ciudadanos, al garantizar un sistema más confiable y ordenado. Adoptar esta medida es, por tanto, una decisión que reforzará el marco normativo y contribuirá al bienestar general de la sociedad nuevoleonense.

Se presenta cuadro comparativo con el fin de esclarecer lo planteado en la presente iniciativa:

LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
Texto vigente	Texto propuesto
<p>Capítulo V De la inscripción de vehículos</p> <p>Artículo 25. Los titulares de los registros de la Sección Primera deberán presentar, en los formatos autorizados por el Instituto, los siguientes avisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Cambio de propietario; II. Cambio de domicilio; III. Cambio de uso, servicio o clase del vehículo; IV. Deterioro, extravío o robo de los medios de identificación vehicular; 	<p>Capítulo V De la inscripción de vehículos</p> <p>Artículo 25. Los titulares de los registros de la Sección Primera deberán presentar, en los formatos autorizados por el Instituto, los siguientes avisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Cambio de propietario; II. Cambio de domicilio; III. Cambio de uso, servicio, clase o color del vehículo; IV-VII.-...

<p>V. Baja de registro;</p> <p>VI. Rectificación de datos; y</p> <p>VII. Registro de la póliza de seguro del automóvil.</p> <p>Capítulo VIII De las infracciones y sanciones</p> <p>Artículo 37. Son infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley:</p> <p>I. No inscribir los vehículos, en los términos establecidos en su artículo 21;</p> <p>II. No refrendar los registros de los vehículos inscritos, en los términos establecidos en su artículo 24;</p> <p>III-VII.-...</p> <p>Artículo 38. Las sanciones correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo anterior serán como sigue:</p> <p>I. De 30 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la comprendida en la fracción I;</p> <p>II. De 15 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la comprendida en la fracción II;</p> <p>III-V.-...</p>	<p>Capítulo VIII De las infracciones y sanciones</p> <p>Artículo 37. Son infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley:</p> <p>I. No inscribir los vehículos, en los términos establecidos en su artículo 21;</p> <p>II. No refrendar los registros de los vehículos inscritos, en los términos establecidos en su artículo 24;</p> <p>II. BIS.- No declarar el cambio de color en el vehículo, en los términos establecidos en su artículo 25;</p> <p>III-VII.-...</p> <p>Artículo 38. Las sanciones correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo anterior serán como sigue:</p> <p>I. De 30 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la comprendida en la fracción I;</p> <p>II. De 15 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la comprendida en la fracción II y II.BIS;</p> <p>III-V.-...</p>
---	--

Por lo antes expuesto, se propone el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se **REFORMA** la fracción III al artículo 25, la fracción II al artículo 38 y se **ADICIONA** la fracción II BIS al artículo 37 de la **LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN** para quedar como sigue:

CAPÍTULO V DE LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS

Artículo 25. Los titulares de los registros de la Sección Primera deberán presentar, en los formatos autorizados por el Instituto, los siguientes avisos:

I-II.- ...

III.- Cambio de uso, servicio, clase o color del vehículo;

IV-VII.-...

CAPÍTULO VIII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37. Son infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley:

I-II.-...

II. BIS.- No declarar el cambio de color en el vehículo, en los términos establecidos en su artículo 25;

IV-VII.-...

Artículo 38. Las sanciones correspondientes a las infracciones señaladas en el artículo anterior serán como sigue:

I.-...

II.- De 15 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la comprendida en la fracción II y **II.BIS**;

III-V.-...

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

MONTERREY, NUEVO LEÓN., A FEBRERO DEL 2025

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL


DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**DIP. CARLOS ALBERTO DE LA
FUENTE FLORES**

**DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO
ALMANZA**





PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



DIP. AILE TAMEZ DE LA PAZ

DIP. CLAUDIA GABRIELA
CABALLERO CHÁVEZ

DIP. CECILIA SOFÍA ROBLEDO
SUÁREZ

DIP. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
LECHUGA

DIP. JOSÉ LUIS SANTOS
MARTÍNEZ

DIP. IGNACIO CASTELLANOS
AMAYA

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO
IRACHETA



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de una fracción XI Bis al Artículo 7 de la Ley de Educación del Estado.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Mtro. Joel Treviño Chavira

Oficial Mayor

DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -

El suscrito **Diputado Mauro Guerra Villarreal** e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta soberanía a proponer el siguiente proyecto de decreto por el que se **ADICIONA** la fracción XI BIS al artículo 7 de la **LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El manejo adecuado de los residuos orgánicos es un tema central en la búsqueda de soluciones sostenibles ante la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. En México, aproximadamente el 50% de los residuos sólidos urbanos corresponde a materia orgánica, los cuales terminan en rellenos sanitarios o vertederos, generando gases de efecto invernadero. Este problema se agrava por la falta de conciencia sobre el impacto de estos desechos y por la limitada implementación de políticas que promuevan su aprovechamiento.

Aunado a ello, las escuelas representan un espacio estratégico para formar generaciones conscientes y responsables, capaces de asumir un papel activo en la protección del medio ambiente.

La gestión integral de residuos en las escuelas es una acción clave para promover el cuidado del medio ambiente y formar una comunidad educativa más consciente. Enfocándose en reducir la cantidad de desechos generados, fomentar la reutilización de materiales y garantizar un reciclaje adecuado, incluyendo la separación de residuos como papel, plástico y orgánicos, los cuales pueden transformarse en recursos útiles, por ejemplo, a través del compostaje. Sin embargo, no se limita a instalar solamente contenedores diferenciados, sino que requiere la participación activa de estudiantes, docentes y personal administrativo mediante campañas, talleres y actividades. Este enfoque no solo beneficiará a la escuela, sino que también impulsa hábitos sostenibles que los estudiantes pueden replicar en sus hogares y comunidades.

Las escuelas no solo son lugares de aprendizaje académico, sino también espacios de formación en valores y conductas que trascienden hacia el ámbito familiar y social, que al implementar programas de separación, compostaje y gestión integral de residuos orgánicos, se puede lograr una doble finalidad: reducir la carga ambiental y fortalecer el sentido de responsabilidad ecológica en las futuras generaciones.

El aprovechamiento de los residuos orgánicos en las escuelas implica transformar un problema ambiental en una oportunidad educativa. Prácticas como el compostaje permiten convertir los desechos orgánicos en abono natural, lo cual no solo disminuye la cantidad de basura enviada a los vertederos, sino que también enriquece el suelo y fomenta la agricultura urbana.

Estas actividades, al ser integradas en el currículum escolar, facilitan la enseñanza de conceptos clave relacionados con la biología, el ciclo de los nutrientes y la economía circular, haciendo que los estudiantes comprendan el impacto directo de

sus acciones en el medio ambiente. Además, despiertan un sentido de responsabilidad compartida, pues los niños y jóvenes se convierten en agentes de cambio al replicar estas prácticas en sus hogares y comunidades.

Asimismo, los productos derivados del aprovechamiento de los residuos, como la composta, pueden ser utilizados en huertos escolares o compartidos con la comunidad, fortaleciendo lazos entre la escuela y su entorno, entendiendo que los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, que están bajo el cuidado de las y los alumnos y suelen producir vegetales, frutas, plantas medicinales y/o flores.

Una de las principales razones para incorporar un huerto escolar es hacer que las y los estudiantes entiendan su entorno y aprecien mejor el mundo que les rodea; sepan lo que cuesta producir los alimentos que consumen y se concienticen sobre la importancia de hacer un uso responsable del agua, la tierra, el sol y el aire, permitiendo conocer productos autóctonos e identificar los propios de la época, así como también se concientiza sobre los productos que se plantan, cosechan y recogen y a su vez, favoreciendo una alimentación saludable y equilibrada; conociendo los alimentos que se cultivan, lo cual estará despertando el interés por probarlos.

La promoción de prácticas sostenibles en el manejo de residuos orgánicos también contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, en particular los objetivos 12 (Producción y Consumo Responsables) y 13 (Acción por el Clima). Al incorporar estas prácticas en las escuelas, se genera una acción local con un impacto global, pues se disminuye la huella ecológica y se contribuye a mitigar los efectos del cambio climático.

Asimismo, la sensibilización de los estudiantes debe ir acompañada de campañas de concienciación dirigidas a las familias, fomentando la adopción de prácticas sostenibles más allá del entorno escolar.

Al implementar estas acciones, las escuelas no solo contribuyen a resolver un problema global, sino que también siembran la semilla de un cambio cultural profundo que permitirá construir un futuro más limpio, sostenible y consciente para todos. Las instituciones educativas tienen en sus manos la posibilidad de liderar este cambio, transformándose en ejemplo y motor de una nueva forma de convivencia en materia de sostenibilidad.

Se presenta cuadro comparativo con el fin de esclarecer lo planteado en la presente iniciativa:

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO	
Texto vigente	Texto propuesto
<p>CAPÍTULO II DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE AUTORIDADES</p> <p>Artículo 7. - La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:</p> <p>I – X.-</p> <p>XI.- Inculcar el respeto al medio ambiente, así como los conceptos y principios</p>	<p>CAPÍTULO II DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE AUTORIDADES</p> <p>Artículo 7. - La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:</p> <p>I – X.-</p> <p>XI.- Inculcar el respeto al medio ambiente, así como los conceptos y principios</p>

fundamentales de la ciencia ambiental, el fomento de hábitos dirigidos a un estilo de vida sustentable, la sensibilización y prevención sobre las causas y efectos del cambio climático, de igual manera la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales y en particular, desarrollar una cultura del agua;

XII – XXIV .-

fundamentales de la ciencia ambiental, el fomento de hábitos dirigidos a un estilo de vida sustentable, la sensibilización y prevención sobre las causas y efectos del cambio climático, de igual manera la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales y en particular, desarrollar una cultura del agua;

XI BIS.- Promover la gestión integral y el aprovechamiento de residuos orgánicos a través de prácticas sostenibles.

XII – XXIV .-

Es por lo anterior expuesto que, acudimos a esta Soberanía a presentar el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se **ADICIONA** la fracción XI BIS al artículo 7 de la **LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO** para quedar como sigue:

CAPÍTULO II

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE AUTORIDADES

Artículo 7. - La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I – XI.-

XI BIS. - **Promover la gestión integral y el aprovechamiento de residuos orgánicos a través de prácticas sostenibles.**

XII – XXIV.-

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

MONTERREY, NUEVO LEÓN., A FEBRERO DEL 2025

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



DIP. CARLOS ALBERTO DE LA
FUENTE FLORES

DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO
ALMANZA

DIP. AILE TAMEZ DE LA PAZ

DIP. CLAUDIA GABRIELA
CABALLERO CHÁVEZ

DIP. CECILIA SOFÍA ROBLED
SUÁREZ

DIP. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
LECHUGA

DIP. JOSÉ LUIS SANTOS
MARTÍNEZ

DIP. IGNACIO CASTELLANOS
AMAYA



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA



[Handwritten signature]
DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO
IRACHETA



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en materia del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtro. Joel Treviño Chavira

Oficial Mayor

17



DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-

La suscrita **DIPUTADA MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presento **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO NUEVO LEÓN, EN MATERIA DEL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS (RNOA).**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Partido del Trabajo a lo largo de su historia hemos velado por la población más vulnerable de la sociedad, la cual se ha logrado transformar a partir de una intervención de participación colectiva: autoridad y ciudadanía, logrando reducir esa brecha de desigualdad, misma que a la par, en la actualidad, debe hacerse acompañar por una serie de reformas o modificaciones.

Los intentos por proteger el interés superior de la infancia ha sido amplios, pero no los suficientes para un mundo en constante cambio, lo que ha derivado que se expidan desde convenios, leyes y tratados Internacionales de los cuales nuestro país forma parte para cuidar a este sector de la población que ante el desamparo familiar o de uno de los cónyuges existe el riesgo inminente de ser vulnerable a la violación de sus derechos, cayendo en situaciones de riesgo que podría comprometer su integridad física o estado de salud.

Nuestra normativa Civil estadual establece que las personas deudoras alimentarias deben suministrar a sus dependientes lo necesario para desarrollarse en nuestra sociedad debiendo asegurar el pago de diversos elementos como comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y los gastos de embarazo y parto.

Un claro ejemplo, por citar uno de los ordenamientos o acuerdos Internacionales en los que se encuentra suscrito México y que aborda el interés superior de la niñez, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual, en su artículo 25, dispone que las niñas y niños son merecedores de cuidados y asistencia especial.

Siendo uno de los principales elementos dentro de la infancia y la adolescencia los alimentos, toda vez que es la etapa de la vida donde se desarrollan el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social de la persona.

Derivado de todo lo anterior, en la actualidad el deber ser, es que los cónyuges, aquella unión materializada en un matrimonio, y de este el nacimiento de hijos, o conformación de un núcleo familiar, sean quienes asuman este rol de proteger a los menores satisfaciendo sus necesidades para insertarse en una sociedad gradualmente hasta ser personas adultas.

Para dimensionar la incidencia social, en México, durante 2023, según el INEGI, se registraron 163 mil 587 divorcios, los cuales en un 90.0 % se resolvieron por la vía judicial y 10.0 %, por la vía administrativa.

En Nuevo León durante el 2023 se registraron 15 mil 759 divorcios, de los cuales 13 mil 627 fueron incausados; mil 726 por mutuo consentimiento y 303 por separación del hogar conyugal por más de un año.

Si en esta incidencia consideramos la procreación, es decir la existencia de hijos, encontramos un escenario donde en la vía del divorcio incausado, que predomina hoy en día, no siempre los cónyuges llegan a un común acuerdo para fijar una pensión alimenticia o compensatoria, provocando que estas mismas tengan que demandar lo anterior en un juicio accesorio, atendiendo solo el juicio principal en

cuanto a la disolución del vínculo matrimonial, situación que llega a demorar u ocasionar que una de las partes fomente la falta de atención o una omisión.

Derivado de las controversias registradas se crea el Registro Nacional De Deudores Alimentarios (RNOA) para garantizar que el deudor alimenticio, sea hombre o mujer, cumpla con sus obligaciones, pues en caso de lo contrario serían acreedores a ser publicados en la plataforma de deudores morosos lo que derivaría que tuvieran algunas restricciones para poder realizar trámites básicos como expedir su licencia de manejo o pasaporte entre algunos otros más que el máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado legal y no violatorio a los Derechos Humanos, anteponiendo el interés superior del menor.

Es importante destacar que 18 entidades federativas, ya están incorporadas al registro nacional de obligaciones alimentaria RNOA y faltan 14 entre ellos Nuevo León, siendo los siguientes:

No	ENTIDADES INCORPORADAS	ENTIDADES NO INCORPORADAS
1	AGUASCALIENTES	NUEVO LEÓN
2	BAJA CALIFORNIA SUR	BAJA CALIFORNIA NORTE
3	CAMPECHE	COLIMA
4	CHIAPAS	CHIHUAHUA
5	DURANGO	COAHILA
6	ESTADO DE MEXICO	GUANAJUATO
7	GUERRERO	HIDALGO
8	MICHOACAN DE OCAMPO	JALISCO
9	MORELOS	OAXACA
10	NAYARIT	PUEBLA
11	QUERETARO	SINALOA
12	QUINTANA ROO	ZACATECAS
13	TABASCO	CD DE MEXICO
14	TAMAULIPAS	SONORA
15	TLAXCALA	
16	SAN LUIS POTOSI	
17	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	
18	YUCATAN	

Por ello, se propone una serie de reformas al Código Civil para el Estado de Nuevo León, donde se plantea regular diversas cuestiones referentes a establecer dentro del procedimiento de matrimonio elementos que tendrán que manifestarse cuando

se pretenda celebrar este contrato, en cuanto si algunos de los contrayentes de obligaciones están inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Asimismo, se establece que deberán acompañar el documento que ampare que no está inscrito en dicho Registro, así como que los jueces o titulares del registro civil contemplen dar certeza jurídica y transparencia cuando celebren alguna unión familiar, así como otros temas en materia de adopción.

Por lo anterior se propone, lo siguiente:

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO NUEVO LEÓN VIGENTE	PROPUESTA
<p>Artículo. 92.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, expresará:</p> <p>I a II ...</p> <p>NO EXISTE REFERENCIA.</p> <p>III a IV ...</p>	<p>Artículo. 92.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, expresará:</p> <p>I a II ...</p> <p>II Bis.- <u>Si la o el solicitantes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias;</u></p> <p>III a IV ...</p>
<p>Artículo. 94.- A la solicitud a que se refieren los artículos anteriores, se acompañará:</p> <p>I a VI ...</p> <p>VII.- Copia de la dispensa de impedimentos si los hubo; y</p> <p>VIII.- Constancia que acredite haber tomado el curso que hace referencia el artículo 149 de este código.</p> <p>NO EXISTE REFERENCIA.</p>	<p>Artículo 94.- A la solicitud a que se refieren los artículos anteriores, se acompañará:</p> <p>I a VI ...</p> <p>VII.- Copia de la dispensa de impedimentos si los hubo;</p> <p>VIII.- Constancia que acredite haber tomado el curso que hace referencia el artículo 149 de este código; <u>y</u></p> <p><u>IX.- El certificado de no Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que hace referencia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.</u></p>
<p>Art. 99.-En el lugar, día y hora señalados para la celebración del</p>	<p>Artículo 99.- En el lugar, día y hora señalados para la celebración del</p>

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO NUEVO LEÓN VIGENTE	PROPUESTA
<p>matrimonio, se presentarán al Oficial del Registro Civil los pretendientes o su apoderado especial, constituido en la forma prevenida en el artículo 49, y dos testigos por cada uno de ellos que acrediten su identidad.</p> <p>....</p> <p>NO EXISTE REFERENCIA.</p>	<p>matrimonio, se presentarán al Oficial del Registro Civil los pretendientes o su apoderado especial, constituido en la forma prevenida en el artículo 49, y dos testigos por cada uno de ellos que acrediten su identidad.</p> <p>...</p> <p><u>La Jueza o Juez del Registro Civil hará del conocimiento de las y los pretendientes, si alguno se encuentra inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene con sus dependientes alimentarios en caso de haberlos.</u></p>
<p>NO EXISTE REFERENCIA.</p>	<p><u>Artículo 148 Bis.- En las solicitudes de matrimonio que se presenten ante el Registro Civil hará del conocimiento entre ellos si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que corresponde a cada uno decretando si tiene algún impedimento para ello.</u></p>
<p>Artículo 321 bis 3.- Toda persona a quien por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez.</p> <p>Quienes se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al obligado a ocultar o disminuir</p>	<p>Artículo 321 bis 3.- Toda persona a quien por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez.</p> <p>Quienes se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al obligado a ocultar o disminuir sus</p>

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO NUEVO LEÓN VIGENTE	PROPUESTA
sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones con independencia del delito que le resulte, será sancionado con una multa de hasta ciento cincuenta cuotas, la cual se aplicará a favor de los acreedores alimentarios.	bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones con independencia del delito que le resulte, será sancionado con una multa de hasta ciento cincuenta cuotas, la cual se aplicará a favor de los acreedores alimentarios.
NO EXISTE REFERENCIA.	<p><u>La persona deudora alimentaria deberá informar, en un máximo de quince días hábiles a la persona acreedora alimentaria, a la Jueza, Juez o autoridad competente, lo siguiente:</u></p>
NO EXISTE REFERENCIA.	<p><u>I.- Cualquier cambio en su empleo,</u> <u>II.- El lugar y localización de ésta, y</u> <u>III.- El trabajo, puesto, cargo o comisión que desempeñará.</u></p>
NO EXISTE REFERENCIA.	<p><u>Lo anterior a partir de que ocurra el cambio de trabajo o centro de trabajo, a efecto de que se actualice la pensión alimenticia decretada.</u></p>
<p>Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, aún libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores, aun cuando se encuentren incapacitados, siempre que el adoptante tenga 15 años o más que el adoptado salvo en el caso de adopción entre personas con lazos de parentesco, y que acredite, además:</p> <p>I a VI ...</p> <p>VII. La identidad, las circunstancias familiares y sociales, así como la historia médica y los antecedentes en materia de tradiciones, creencias y entorno cultural, del menor que se</p>	<p>Artículo. 390.- El mayor de veinticinco años, aún libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores, aun cuando se encuentren incapacitados, siempre que el adoptante tenga 15 años o más que el adoptado salvo en el caso de adopción entre personas con lazos de parentesco, y que acredite, además:</p> <p>I a VI ...</p> <p>VII. La identidad, las circunstancias familiares y sociales, así como la historia médica y los antecedentes en materia de tradiciones, creencias y entorno cultural, del menor que se pretenda adoptar,</p>

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO NUEVO LEÓN VIGENTE	PROPUESTA
pretenda adoptar, siempre que no se trate de un menor expósito;-y	siempre que no se trate de un menor expósito;
VIII. Opinión del Consejo Estatal de Adopciones.	VIII. Opinión del Consejo Estatal de Adopciones; <u>y</u>
NO EXISTE REFERENCIA.	IX.- <u>Que ninguno adoptante se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que se refiere la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.</u>
...	...
...	...
...	...
NO EXISTE REFERENCIA.	<u>El requisito a que se refiere la fracción IX de este artículo, quedará plenamente acreditado con el certificado de no Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que hace referencia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.</u>

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. – Se **REFORMAN** las fracciones VI y VII del artículo 94, VII y VIII del artículo 390; se **ADICIONA** una fracción II Bis al artículo 92; una fracción XI al artículo 94, la adición de un párrafo tercero al artículo 99, la adición de un artículo 148 bis, un párrafo tercero y cuarto párrafo al artículo 321 Bis 3, una fracción IX y un último párrafo del artículo 390, todos del **Código Civil para el Estado Nuevo León**; para quedar como sigue:

Artículo. 92.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, expresará:

I a II ...

II Bis.- Si la o el solicitantes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias;

III a IV ...

Artículo 94.- A la solicitud a que se refieren los artículos anteriores, se acompañará:

I a VI ...

VII.- Copia de la dispensa de impedimentos si los hubo;

VIII.- Constancia que acredite haber tomado el curso que hace referencia el artículo 149 de este código; y

IX.- El certificado de no Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que hace referencia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 99.-En el lugar, día y hora señalados para la celebración del matrimonio, se presentarán al Oficial del Registro Civil los pretendientes o su apoderado especial, constituido en la forma prevenida en el artículo 49, y dos testigos por cada uno de ellos que acrediten su identidad.

...

La Jueza o Juez del Registro Civil hará del conocimiento de las y los pretendientes, si alguno se encuentra inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene con sus dependientes alimentarios en caso de haberlos.

Artículo 148 Bis.- En las solicitudes de matrimonio que se presenten ante el Registro Civil hará del conocimiento entre ellos si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, mencionando la situación

que guardan respecto de las obligaciones que corresponde a cada uno decretando si tiene algún impedimento para ello.

Artículo 321 bis 3.- Toda persona a quien por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez.

Quienes se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al obligado a ocultar o disminuir sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones con independencia del delito que le resulte, será sancionado con una multa de hasta ciento cincuenta cuotas, la cual se aplicará a favor de los acreedores alimentarios.

La persona deudora alimentaria deberá informar, en un máximo de quince días hábiles a la persona acreedora alimentaria, a la Jueza, Juez o autoridad competente, lo siguiente:

I.- Cualquier cambio en su empleo,

II.- El lugar y localización de ésta, y

III.- El trabajo, puesto, cargo o comisión que desempeñará.

Lo anterior a partir de que ocurra el cambio de trabajo o centro de trabajo, a efecto de que se actualice la pensión alimenticia decretada.

Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, aún libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores, aun cuando se encuentren incapacitados, siempre que el adoptante tenga 15 años o más que el adoptado salvo en el caso de adopción entre personas con lazos de parentesco, y que acredite, además:

I a VI ...

VII. La identidad, las circunstancias familiares y sociales, así como la historia médica y los antecedentes en materia de tradiciones, creencias y entorno cultural, del menor que se pretenda adoptar, siempre que no se trate de un menor expósito;

VIII. Opinión del Consejo Estatal de Adopciones; **y**

IX.- Que ninguno adoptante se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que se refiere la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

...

...

...

El requisito a que se refiere la fracción IX de este artículo, quedará plenamente acreditado con el certificado de no Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que hace referencia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

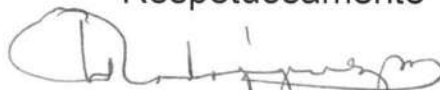
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Monterrey, Nuevo León, a 12 de febrero del 2025

Respetuosamente



Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez

**COORDINADORA GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO**



HOJA DE FIRMA CORRESPONDIENTE A LAS REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO NUEVO LEÓN, EN MATERIA DEL REGISTRO NACIONAL
DE DEUDORES ALIMENTARIOS (RNOA).

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO A: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en materia del Registro Nacional de Deudores alimentarios.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): DE LA FAMILIA Y DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-

La suscrita **DIPUTADA MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO,** con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presento **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DEL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS (RNOA).**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección, cuidado y desarrollo integral de los niñas, niños y adolescentes es fundamental para las sociedades democráticas, ya que sobre ellos recaerá la construcción de un futuro prometedor y de una sociedad más prometedora.

Es en este entendido es que desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio del interés superior de la niñez, señalando lo siguiente:

“en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, por lo que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”

Este principio no solo se encuentra plasmado en nuestro máximo ordenamiento, sino que es ratificado por el Estado Mexicano en distintos instrumentos internacionales que han sido suscrito por nuestro país y que gracias a ello se han instrumentado políticas y acciones a cumplir con dichos compromisos.

Un claro ejemplo de ello es “la Convención sobre los Derechos del Niño”, misma que refiere dentro de su articulado que una de las obligaciones de los Estados Parte, al considerar el interés superior de la niñez, en todas las medidas dirigidas a este grupo, con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos.

Otros de los instrumentos, que también contienen el interés superior de la niñez, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual, en su artículo 25, dispone que las niñas y niños son merecedores de cuidados y asistencia especial.

Siendo uno de los principales elementos dentro de la infancia y la adolescencia los alimentos, toda vez que es la etapa de la vida donde se desarrollan el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social de la persona.

En este mismo sentido, es preciso señalar que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el acceso a una alimentación adecuada es un derecho individual y una responsabilidad colectiva, siendo responsabilidad de la autoridad garantizarla a través de los procedimientos o mecanismos, razón por la que debe garantizarse de una forma efectiva.

Dentro del derecho civil se establece que las personas deudoras alimentarias deben suministrar a sus dependientes lo indispensable para sobrevivir y tener lo necesario para desarrollarse en nuestra sociedad debiendo asegurar el pago de diversos elementos como comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y los gastos de embarazo y parto.

Sin embargo, en algunas ocasiones las personas se convierten en deudores morosos que evaden dicha responsabilidad dejando en el desamparo a grupos con gran vulnerabilidad, como son niñas, niños y adolescentes, adultos mayores o que tienen algún tipo de padecimiento o discapacidad que les impide sostenerse a través del trabajo o cualquier otra actividad para su supervivencia.

En dicho tenor y con la intención de garantizar la efectividad del cumplimiento de los alimentos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, una serie de modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), aprobadas por el Congreso federal, para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RNOA), como una herramienta para garantizar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de evitar que las personas incumplan con las obligaciones alimentarias; concentrando la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No obstante, el artículo tercero transitorio de dicha reforma establece lo siguiente:

Tercero. Los Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, contarán con un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, **para armonizar el marco normativo correspondiente, en armonía con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF**, conforme a lo establecido por el presente Decreto.

Resulta evidente que el plazo para realizar las reformas secundarias esta vencido por parte de este Poder Legislativo.

De la misma manera se publicaron en fecha 08 de agosto de 2023, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación por el que se expiden los Lineamientos para regular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Es importante destacar que 18 entidades federativas, ya están incorporadas al registro nacional de obligaciones alimentaria RNOA y faltan 14 entre ellos Nuevo León, siendo los siguientes:

No	ENTIDADES INCORPORADAS	ENTIDADES NO INCORPORADAS
1	AGUASCALIENTES	NUEVO LEÓN
2	BAJA CALIFORNIA SUR	BAJA CALIFORNIA NORTE
3	CAMPECHE	COLIMA
4	CHIAPAS	CHIHUAHUA
5	DURANGO	COAHILA
6	ESTADO DE MEXICO	GUANAJUATO
7	GUERRERO	HIDALGO
8	MICHOACAN DE OCAMPO	JALISCO
9	MORELOS	OAXACA
10	NAYARIT	PUEBLA
11	QUERETARO	SINALOA
12	QUINTANA ROO	ZACATECAS
13	TABASCO	CD DE MEXICO
14	TAMAULIPAS	SONORA
15	TLAXCALA	
16	SAN LUIS POTOSI	
17	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	
18	YUCATAN	

Por ello, se propone una serie de reformas a la **Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León** y así permitirnos dar cumplimiento a la reforma concerniente al Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RNOA).

Este ordenamiento se modifica para establecer y garantizar una protección efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes

estableciendo y reconocer como instrumento el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Se establece que, para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades competentes en el Estado tendrán acceso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como es el Poder Judicial del Estado, la Procuraduría de Protección y toda aquella que tenga que velar por la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior se propone, lo siguiente:

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
VIGENTE	PROPUESTA
<p>Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:</p> <p>I a XXIX ..</p> <p>NO EXISTE REFERENCIA</p> <p>XXX a XXXIX. ...</p>	<p>Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:</p> <p>I a XXIX ..</p> <p>XXIX Bis <u>Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: El establecido en el Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.</u></p> <p>XXX a XXXIX. ...</p>
<p>Artículo 121. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas,</p>	<p>Artículo 121. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas,</p>

**LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN**

VIGENTE	PROPUESTA
<p>conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:</p> <p>I. Garantizar sus derechos alimentarios, el desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.</p> <p>Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación;</p> <p>NO EXISTE REFERENCIA.</p>	<p>conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:</p> <p>I. Garantizar sus derechos alimentarios, el desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.</p> <p>Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica recreación, <u>sustento, supervivencia y en especie los que señala el artículo 308 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.</u></p> <p><u>Para brindar una protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades con competencia en la entidad tendrán acceso al Registro Nacional de Obligaciones</u></p>

**LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN**

VIGENTE	PROPUESTA
<p>NO EXISTE REFERENCIA.</p> <p>II a XI ...</p> <p>...</p>	<p><u>Alimentarias, que señala la Ley General.</u></p> <p><u>El encargado de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar, y actualizar la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias será el Tribunal Superior de Justicia del Estado conforme a lo que establece la Ley General y demás disposiciones.</u></p> <p>II a XI ...</p> <p>...</p>
<p>Artículo 145. Son atribuciones de la Procuraduría de Protección las siguientes:</p> <p>I a XXXV ...</p> <p>XXXVI. Realizar las acciones necesarias para investigar y proteger de manera integral a niñas y adolescentes, en situación de embarazo temprano; y</p> <p>NO EXISTE REFERENCIA.</p>	<p>Artículo 145. Son atribuciones de la Procuraduría de Protección las siguientes:</p> <p>I a XXXV ...</p> <p>XXXVI. Realizar las acciones necesarias para investigar y proteger de manera integral a niñas y adolescentes, en situación de embarazo temprano;</p> <p><u>XXXVI Bis. Tener acceso a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, conforme</u></p>

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
VIGENTE	PROPUESTA
XXXVII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. ...	<u>lo que determine la Ley General y las disposiciones aplicables, y</u> XXXVII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. ...

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. –Se reforman **REFORMA** el párrafo segundo de la fracción I del artículo 121 y las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 145; Se **ADICIONA** se adiciona una fracción XXXIB Bis del artículo 4, un párrafo tercero y cuarto a la fracción I del artículo 121 y una fracción XXXVI Bis al artículo 145 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a XXIX ..

XXIX Bis Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: El establecido en el Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

XXX a XXXIX. ...

Artículo 121. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica recreación, **sustento, supervivencia y en especie los que señala el artículo 308 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.**

Para brindar una protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades con competencia en la entidad tendrán acceso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que señala la Ley General.

El encargado de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar, y actualizar la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias será el Tribunal Superior de Justicia del Estado conforme a lo que establece la Ley General y demás disposiciones.

II a XI ...

...

Artículo 145. Son atribuciones de la Procuraduría de Protección las siguientes:

I a XXXV ...

XXXVI. Realizar las acciones necesarias para investigar y proteger de manera integral a niñas y adolescentes, en situación de embarazo temprano;

XXXVI Bis. Tener acceso a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, conforme lo determine la Ley General y las disposiciones legales aplicables, y

XXXVII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

...

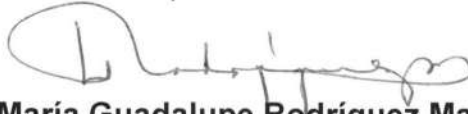
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Monterrey, Nuevo León, a 10 de enero del 2025

Respetuosamente



Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez

Coordinadora

Grupo Legislativo del Partido del Trabajo



-S/A-

HOJA DE FIRMA CORRESPONDIENTE A LAS REFORMA DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DEL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS (RNOA).

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MIGUEL ÁNGEL FLORES SERNA, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 10 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): DESARROLLO SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INDÍGENAS

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-



Diputado Miguel Ángel Flores Serna Coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un tema que debe de tratarse con suma relevancia a nivel nacional, estatal y local es el aumento de los casos de embarazos en adolescentes, se estima que México podría estar ocupando el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).¹ Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha expresado que, según sus cifras, en el 2021 dentro del rango de los adolescentes de 15 a 19 años, sucedieron 147,279 nacimientos, además, en el caso de niñas menores de 15 años la cifra alcanzó 3,019.

¹ <https://repositorio.tec.mx/ortec/handle/11285/636182>

El embarazo en adolescentes puede comprometer y vulnerar de manera significativa los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos a la salud, educación y laborales de las niñas y adolescentes que se convierten en madres a temprana edad. Esta situación representa no solo un desafío personal para las menores afectadas y sus familias, sino también un problema de salud pública y de desarrollo social que requiere atención prioritaria.

Por lo tanto, las adolescentes embarazadas enfrentan numerosas barreras que afectan sus oportunidades de vida. El acceso limitado a servicios de salud adecuados puede aumentar los riesgos tanto para la madre como para el niño. Además, en la mayoría de los casos se da la interrupción de la educación, siendo una consecuencia directa del embarazo adolescente, lo cual perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. Desde una perspectiva laboral, tienen menos probabilidades de adquirir las habilidades necesarias para integrarse en el mercado de trabajo, afectando su independencia económica futura.

Desgraciadamente, esta problemática se ha convertido en un problema de salud pública en el estado, en virtud de ser considerado como multifactorial. Así mismo la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) llevada a cabo por el INEGI, arroja que durante 2022 se presentaron 184 nacimientos en los que la madre se encontraba en el rango de 10 a 14 años, sumándose en México 7 mil 255 casos. ²

Respecto a la condición de actividad laboral y económica De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, únicamente el 20.5% de las madres adolescentes trabaja, por lo que en su mayoría (el 74.9% restante) no realiza una actividad

² <https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/3-anos-512-ninas-nuevo-leon-volvieron-mamas>

remunerada, de igual forma es para el caso de madres menores de 15 años, las cuales 19/% si trabajan y 74.4% no lo hacen. ³

Así, para fomentar el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de las madres y padres adolescentes, es imperativo desarrollar estrategias que las y los capaciten para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades parentales y, simultáneamente, puedan continuar con su desarrollo personal y profesional. Resulta esencial seguir investigando y promoviendo soluciones innovadoras y efectivas que faciliten su plena integración en la sociedad.

Con la finalidad de solucionar esta grave problemática, se ha establecido en el país la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), siendo un trabajo en conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal, además de contar con la colaboración de organismos internacionales, personas expertas del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como finalidad reducir el índice de embarazos en adolescentes, respetando los derechos humanos, puntualmente los derechos sexuales y reproductivos. ⁴

En este sentido, el Gobierno del Estado, encabezados por el Gobernador Samuel García Sepúlveda; la Titular de AMAR Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, se implementó a partir del 2022 el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), en virtud que el cuidado integral de niñas, niños y adolescente es una prioridad para Nuevo León. ⁵

³ https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_EmbNoPlanificado23.pdf

⁴ <https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454>

⁵ <https://historico.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/va-gobierno-de-nuevo-leon-por-disminucion-de-embarazos-en>

Por su parte, en nuestra Nueva Constitución de Nuevo León, contempla en su Artículo 36 lo siguiente:

*“Artículo 36.- **La niñez**, con énfasis especial en la primera infancia, **tiene derecho a un estado de bienestar físico, mental, emocional e inclusivo, a la satisfacción de sus necesidades de salud, alimentación, educación, desarrollo creativo, identidad, sano esparcimiento, a la preparación para el trabajo y a llevar una vida digna y libre de violencia para su desarrollo integral, así como a la convivencia familiar.** El Estado proveerá lo necesario y expedirá leyes y normas para garantizar el acceso y goce pleno de todos sus derechos, teniendo como consideración fundamental que **siempre se atenderá al interés superior de la niñez**, con especial énfasis en la inclusión de la niñez con alguna discapacidad.”*

Es importante reconocer que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha expresado a través de una Jurisprudencia sobre el interés superior de la niñez,

“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el “interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes”; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, “se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus

*garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. **El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño"**, lo que significa que, en **"cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá"**, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."*⁶

Así mismo, se establece en el Artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León, que las madres adolescentes son un grupo vulnerable al cual se le debe dar una atención especial, por lo tanto, se deben implementar políticas públicas con las cuales se pueda mejorar su calidad de vida, por lo cual proponemos adicionar en este ordenamiento la gratuidad tanto de las guarderías como de atención medica para los hijos de madre o padre adolescente.

⁶ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401>

Es crucial proporcionar una asistencia integral a las madres y los padres adolescentes, quienes enfrentan la responsabilidad de criar a sus hijos y constituyen un grupo particularmente vulnerable. Dicha asistencia debe contemplar servicios de salud especializados, apoyo psicológico, programas de reintegro educativo y capacitación laboral. Solo a través de un enfoque multidimensional se podrá garantizar que estos menores o jóvenes y sus hijas e hijos obtengan la oportunidad de un mejor futuro.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se **Adiciona** una fracción XI BIS al Artículo 10, de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I.- a XI.- ...

XI BIS. - Atención de forma gratuita por parte de guarderías o estancias infantiles en beneficio de las hijas e hijos de madres o padres que sean adolescentes y el otorgamiento sin costo de servicios médicos completos e integrales;

XII.- a XXI.- ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto asignado y aprobado en el apartado correspondiente en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal en curso.

En caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los entes ejecutores, ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto autorizado para el presente Ejercicio Fiscal ni subsecuentes como consecuencia de la publicación de este Decreto.

TERCERO. - El Organismo, dentro de los 180 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto, emitirá las directrices o lineamientos correspondientes que regulen las disposiciones contenidas.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la fecha de su presentación.



Dip. Miguel Ángel Flores Serna

**Coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MARISOL GONZÁLEZ ELÍAS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 8, 16 y 17 de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUVENTUD

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

20



**PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE. -**

Quienes suscribimos, Diputada Marisol González Elías integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano de la LXXVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, y Edelmiro Cavazos Valdés, en mi calidad de Director General del Instituto Estatal de la Juventud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 102, 103 y 104 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 16 Y 17 DE LA LEY DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD**, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La participación de las juventudes en los procesos de toma de decisiones es un pilar fundamental para el desarrollo democrático y equitativo de nuestra sociedad. En Nuevo León, las juventudes enfrentan desafíos cada vez más complejos, desde la falta de oportunidades en distintos ámbitos hasta la necesidad de espacios reales de incidencia en las políticas públicas que les afectan. Como representantes de este sector, tenemos la responsabilidad de garantizar que las instituciones diseñadas para su atención respondan a sus realidades y que los espacios de representación sean efectivos, transparentes e incluyentes.

Con ese propósito, en mi calidad de **Presidenta de la Comisión de Juventud del H. Congreso del Estado de Nuevo León**, convoqué a una serie de **mesas de trabajo** los días 17 y 24 de enero de 2025, bajo los principios de Parlamento Abierto. Estos ejercicios de diálogo y construcción colectiva reunieron a juventudes de diversos sectores, especialistas y actores clave en la materia, permitiéndonos identificar áreas de oportunidad en la integración del **Consejo Joven de Participación Ciudadana** y de la **Junta de Gobierno** del Instituto Estatal de la Juventud.

A partir de estas sesiones, quedó en evidencia la necesidad de reformar el **Consejo Joven de Participación Ciudadana**, asegurando que su integración y funcionamiento respondan a principios de transparencia, equidad e inclusión. Si

bien la ley vigente establece un Consejo, su integración y operatividad han quedado rezagadas frente a las necesidades actuales de las juventudes. Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo **fortalecer y democratizar la composición del Consejo, garantizando igualdad de oportunidades para todas las juventudes del estado y asegurando que sus integrantes sean seleccionados mediante convocatorias abiertas y procesos transparentes.**

Principales modificaciones

La reforma al artículo 8 de la **Ley del Instituto Estatal de la Juventud** establece una nueva estructura para el Consejo Joven de Participación Ciudadana, bajo las siguientes premisas:

1. **Convocatoria abierta y equidad en la integración:** Se establece que las juventudes que formen parte del Consejo serán elegidas mediante procesos abiertos, con base en criterios de mérito, trayectoria e impacto en la comunidad. Se eliminan los mecanismos discrecionales que pudieran dar lugar a designaciones arbitrarias.
2. **Mayor representación de juventudes en la toma de decisiones:** Se amplía la presencia de jóvenes en el Consejo y se garantiza la representación de sectores diversos, asegurando la inclusión de juventudes de todas las regiones del estado, así como de grupos históricamente marginados, como la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y pueblos originarios.
3. **Depuración de actores gubernamentales para evitar burocratización:** Se reducen las secretarías y dependencias estatales con representación en el Consejo, eliminando aquellas cuya participación no es esencial para su funcionamiento. Esto busca evitar que el Consejo sea un órgano burocrático y, en cambio, potenciar su enfoque en la participación juvenil.
4. **Sesiones periódicas y acceso público a los trabajos del Consejo:** Se establece que el Consejo sesionará bimestralmente y que sus sesiones serán de acceso público, garantizando la rendición de cuentas y la participación abierta en la toma de decisiones.

Por otro lado, en lo referente a la **Junta de Gobierno del Instituto Estatal de la Juventud**, se realizan modificaciones alineadas con la estructura revisada para el Consejo Joven de Participación Ciudadana. Se garantiza la participación de las juventudes en este órgano y se establece su renovación anual, con el fin de que la representación juvenil en la Junta sea dinámica y refleje la pluralidad de ideas y sectores.

La implementación de esta reforma permitirá que el **Consejo Joven de Participación Ciudadana** y la **Junta de Gobierno** del Instituto Estatal de la Juventud se conviertan en espacios verdaderamente representativos, dinámicos y funcionales. La nueva composición del Consejo garantiza que las juventudes sean escuchadas y puedan incidir en las políticas públicas que les afectan, mientras que la reconfiguración de la Junta de Gobierno asegurará que la representación juvenil en el Instituto Estatal de la Juventud sea real y efectiva.

Esta propuesta es el resultado del trabajo conjunto con las juventudes del estado y responde a su demanda de mayor representatividad y participación en los espacios de toma de decisiones. Es un paso firme hacia un Nuevo León donde las juventudes no solo sean objeto de políticas públicas, sino que se conviertan en agentes activos en su diseño, implementación y evaluación.

Por lo expuesto, **sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León la siguiente iniciativa con proyecto de:**

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman en su totalidad los artículos 8, 9, 16 y 17 de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8.- Consejo Joven de Participación Ciudadana

El Consejo Joven de Participación Ciudadana estará conformado de manera transparente, equitativa e incluyente, asegurando que su integración se realice mediante convocatoria pública abierta, garantizando igualdad de oportunidades para todas las juventudes.

El Consejo estará integrado por:

I. Presidencia Honoraria, a cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado o la persona que designe en su representación.

II. Presidencia del Consejo, a cargo de la persona titular de la Dirección General del Instituto, con derecho de voz y voto.

III. Secretaría Técnica, designada por la persona titular de la Dirección General del Instituto, con derecho de voz y voto, encargada de la coordinación operativa del Consejo.

IV. Consejerías Vocales, con derecho de voz y voto, conformadas por:

a) Representantes de instituciones gubernamentales:

i. Comisión Estatal de Derechos Humanos;

ii. Dirección General del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte;

iii. Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León;

iv. Presidencia de la Comisión de Juventud del H. Congreso del Estado de Nuevo León;

v. Secretaría de Cultura;

vi. Secretaría de Educación;

vii. Secretaría de Finanzas y Tesorería General;

viii. Secretaría del Trabajo.

b) Representantes de instituciones de educación superior:

i. Tres juventudes representantes de universidades o instituciones de educación superior en el Estado, públicas o privadas, elegidas mediante convocatoria abierta.

c) Consejerías Juveniles:

i. Veinte juventudes seleccionadas mediante convocatoria pública abierta, garantizando la diversidad y representatividad de sectores, incluyendo juventudes de la diversidad sexual y de género, pueblos originarios y personas con discapacidad, asegurando paridad de género.

V. Sesiones del Consejo Joven:

a) El Consejo Joven sesionará de manera ordinaria cada dos meses y podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando así lo convoque la Presidencia Honoraria o la Presidencia del Consejo.

b) Las sesiones y el trabajo derivado del Consejo Joven serán de acceso público.

Artículo 9.- Las consejerías juveniles serán seleccionadas exclusivamente mediante convocatoria pública abierta, misma que deberá ser gestionada por la comisión de Juventud del Congreso del Estado de Nuevo León, en los términos del reglamento, garantizando igualdad de oportunidades. Las personas integrantes ejercerán su encargo por un periodo de un año, con posibilidad de reelección mediante un nuevo proceso de selección.

Artículo 16.- La Junta de Gobierno del Instituto Estatal de la Juventud estará integrada por:

I. Presidencia de la Junta, a cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.

II. Secretaría de la Junta, a cargo de la persona titular de la Dirección General del Instituto.

III. Vocalías con derecho de voz y voto, integradas por:

a) Secretaría de Finanzas y Tesorería General;

b) Secretaría de Educación;

c) Secretaría de Salud;

d) Dos juventudes integrantes del Consejo Joven de Participación Ciudadana, elegidas mediante convocatoria abierta.

IV. Suplencias:

a) Por cada persona integrante propietaria, podrá nombrarse una suplente, debiendo informar previamente a la Junta de Gobierno sobre dicha designación.

V. Falta temporal de la Presidencia de la Junta:

a) En caso de ausencia de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la

persona titular de la Dirección General del Instituto asumirá la Presidencia para la sesión correspondiente y nombrará a la Secretaría de la misma.

VI. Representación juvenil en la Junta de Gobierno:

a) Las juventudes integrantes del Consejo Joven de Participación Ciudadana que formen parte de la Junta de Gobierno serán seleccionadas anualmente mediante convocatoria pública abierta.

Artículo 17.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias cada seis meses y las extraordinarias que sean necesarias, a convocatoria de la Presidencia de la Junta o por solicitud de la mayoría de sus integrantes.

II. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de al menos cuatro de sus integrantes, siempre que esté presente la persona titular de la Dirección General del Instituto.

III. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las personas integrantes presentes. En caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.

IV. Las juventudes integrantes del Consejo Joven de Participación Ciudadana tendrán derecho de voz y voto en todas las resoluciones de la Junta de Gobierno.

TRANSITORIOS


PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - El instituto dispondrá de 180 días para establecer o adecuar sus reglamentos para efectos de cumplimentar con lo dispuesto en el presente decreto.

Monterrey Nuevo León a día 13 de febrero del año 2025

Suscriben


Diputada Marisol González Elías
Integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
De la LXXVII Legislatura del Honorable Congreso
Del Estado de Nuevo León


Edelmiro Cavazos Valdés
Director general
Del Instituto Estatal de la Juventud
Del Estado de Nuevo León

Esta Hoja es la número 7 de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud, presentada en día 13 de febrero de 2025.



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MARISOL GONZÁLEZ ELÍAS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma por la que se expide la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, la cual consta de 81 artículos y 5 artículos transitorios.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUVENTUD

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor



**PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE. -**

Quienes suscribimos, Diputada Marisol González Elías integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano de la LXXVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, y Edelmiro Cavazos Valdés, en mi calidad de Director General del Instituto Estatal de la Juventud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 102, 103 y 104 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ABROGANDO SU HOMOLOGA** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El contexto en el que se desenvuelven las juventudes ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, generando nuevos retos y oportunidades que demandan una respuesta legislativa acorde a la realidad actual. La presente Ley del Instituto Estatal de la Juventud surge de la necesidad de actualizar y modernizar el marco jurídico que rige las políticas públicas en materia de juventud, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y fortalecer su desarrollo integral en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

A través de esta reforma, se busca armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de juventud, tomando como referencia marcos normativos de avanzada que han incorporado enfoques actualizados sobre participación juvenil, acceso a derechos y políticas públicas inclusivas.

Las personas jóvenes enfrentan hoy una serie de desafíos que la legislación vigente no contempla plenamente. Entre ellos, destacan las dificultades en el acceso a la vivienda y la independencia económica, producto de la precarización laboral y el encarecimiento del suelo urbano; la brecha educativa y la desigualdad en oportunidades, particularmente en comunidades vulnerables; el impacto de la crisis climática y la necesidad de políticas de sostenibilidad dirigidas a las juventudes como agentes de cambio; la acelerada digitalización y sus efectos en el acceso a la información, la privacidad y la protección de datos personales; así como las crecientes exigencias del mercado laboral, que demandan una capacitación permanente y mecanismos efectivos de transición al empleo digno.

Ante este panorama, la falta de actualización del marco normativo ha limitado la implementación de políticas públicas eficaces en estas materias. Es por ello que esta reforma redefine las estrategias de atención a las juventudes bajo un enfoque integral, estableciendo mecanismos concretos de inclusión, participación y acceso equitativo a derechos fundamentales.

Para la construcción de esta iniciativa, se llevaron a cabo mesas de trabajo que resultaron fundamentales para el diagnóstico y la formulación de propuestas concretas. La primera sesión, realizada el 17 de enero de 2025, reunió a representantes del Instituto Estatal de la Juventud y de las instancias municipales en la materia, permitiendo identificar las limitaciones operativas de la legislación vigente. La segunda, celebrada el 25 de enero de 2025, convocó a juventudes de la sociedad civil, universidades y otros sectores interesados mediante un proceso abierto, lo que permitió recoger las inquietudes y demandas de los principales destinatarios de esta reforma.

El análisis derivado de estas mesas de trabajo puso en evidencia la necesidad de replantear el modelo de participación juvenil, asegurando que las juventudes sean verdaderos sujetos de derechos y no únicamente beneficiarios de programas gubernamentales. Asimismo, destacó la importancia de establecer un marco normativo que garantice la inclusión de sectores históricamente excluidos,

promueva la equidad en el acceso a oportunidades y fomente una participación efectiva en la toma de decisiones.

Cabe destacar que esta reforma no pretende desconocer los esfuerzos legislativos previos, sino fortalecer y reorganizar las disposiciones existentes bajo un nuevo esquema que facilite su implementación y seguimiento. Se preserva el contenido esencial de reformas anteriores, pero con una estructura más coherente que permita su aplicación efectiva y garantice una mejor protección de los derechos de las juventudes.

Desde el punto de vista normativo, esta reforma se fundamenta en un enfoque de derechos humanos, en concordancia con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de garantizar el bienestar de las juventudes. Asimismo, atiende los compromisos asumidos en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente en lo relativo a educación de calidad, trabajo digno, reducción de desigualdades y acción por el clima.

La iniciativa incorpora innovaciones significativas respecto de la legislación vigente. En primer lugar, se establece un **Sistema de Garantías para la Inclusión Juvenil**, que define mecanismos de acceso a derechos bajo un enfoque de equidad, priorizando la atención de juventudes en situación de vulnerabilidad. Además, se adopta un enfoque interseccional e inclusivo, asegurando la atención diferenciada de juventudes indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual y de género.

Se amplían las obligaciones de las dependencias estatales y municipales en materia de juventud, incorporando estrategias específicas en educación, cultura, empleo, seguridad y salud. En el ámbito educativo, se establecen medidas para evitar la deserción escolar, garantizar el acceso equitativo a la educación superior y fomentar la formación en habilidades tecnológicas. En el ámbito cultural, se impulsan políticas de promoción del arte, la ciencia, la cultura y el deporte, con infraestructura

accesible y financiamiento para proyectos juveniles. En el ámbito laboral, se implementan programas de capacitación en oficios y emprendimiento, con incentivos para la contratación de juventudes en sectores estratégicos.

Asimismo, la reforma contempla una actualización integral en materia de salud juvenil, asegurando el acceso universal a servicios de salud mental y programas de prevención del suicidio. Se establecen acciones de educación sexual integral con base en evidencia científica, estrategias de prevención y tratamiento de adicciones bajo un enfoque de reducción de daños, y políticas para combatir la obesidad juvenil mediante la promoción de una nutrición saludable.

En materia de vivienda y protección social, se diseñan políticas para facilitar el acceso de las juventudes a vivienda digna y se crean programas específicos de apoyo a juventudes en situación de calle, en conflicto con la ley o en orfandad. Se garantiza el acceso a redes de apoyo, asesoría jurídica y asistencia social, asegurando que las juventudes en situación de vulnerabilidad cuenten con mecanismos efectivos de protección.

Uno de los ejes más relevantes de esta reforma es el fortalecimiento de la participación juvenil en la toma de decisiones. Se establecen espacios formales de consulta y representación, asegurando que las juventudes tengan voz y voto en el diseño de las políticas públicas. Se garantiza su integración en los consejos estatales y municipales, así como en organismos autónomos, permitiendo que su participación no dependa de invitaciones discrecionales, sino que sea resultado de convocatorias abiertas y procesos transparentes.

También se incorporan disposiciones para la protección de los derechos digitales de las juventudes, con medidas orientadas a la prevención de la violencia digital, la explotación en línea y el ciberacoso. Se establecen regulaciones en materia de privacidad y uso seguro de plataformas digitales, y se implementan programas de alfabetización digital y ciberseguridad, asegurando que todas las juventudes

cuenten con herramientas para un ejercicio seguro y responsable de sus derechos en entornos digitales.

Finalmente, la reforma adopta un principio de transversalidad en la implementación de las políticas públicas de juventud, promoviendo la coordinación entre dependencias estatales y municipales, el sector privado y la sociedad civil. Se establecen indicadores y mecanismos de evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas, asegurando que las políticas no solo sean diseñadas, sino que tengan una ejecución efectiva y con resultados medibles.

La reforma de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud representa un paso crucial en la modernización del marco normativo, asegurando que las políticas públicas estatales respondan a la realidad actual y a los desafíos de un mundo en constante transformación. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Congreso del Estado de Nuevo León con las juventudes, garantizando su inclusión en la agenda legislativa y reconociéndolas como protagonistas del presente y futuro de nuestro estado.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - SE EXPIDE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I

DE LOS OBJETIVOS.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Nuevo León, y su aplicación corresponde en el ámbito de su competencia al Ejecutivo estatal y los gobiernos municipales.

Tiene por objeto establecer principios rectores de las políticas públicas que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes, conforme a sus necesidades generales y principalmente garantizar el ejercicio de los derechos de éstos, así como impulsar su desarrollo integral.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

- I. Estado: Al Ejecutivo del Estado de Nuevo León;
- II. Jóvenes: A todas las personas comprendidas entre los 12 y 29 años;
- III. Persona Joven Trabajador de Primer Empleo: Joven trabajador mujer u hombre que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón;
- IV. Juventud: al conjunto de personas jóvenes;
- V. Instituto: al Instituto Estatal de la Juventud del Estado de Nuevo León;
- VI. Programa: al Programa Estatal de la Juventud;

- VII. Institutos municipales: a los Institutos Municipales o a los órganos encargados de la juventud en los municipios;
- VIII. Perspectiva Juvenil: Al enfoque teórico, metodológico, técnico y operativo para la construcción de políticas y acciones sociales, económicas y políticas orientadas a la protección de los derechos humanos, el desarrollo integral y la participación de las personas jóvenes en la vida pública del Estado.
- IX. Derechos de las juventudes: los reconocidos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, en esta Ley y en los demás ordenamientos jurídicos vigentes;
- X. Desarrollo Integral: El proceso sistemático económico, social, cultural y político que garantiza el mejoramiento constante del bienestar de toda la población, sobre las bases de la participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la distribución justa de los beneficios que de él deriven; Y
- XI. Trabajo Digno o Decente: Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; en el cual no deberá existir discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; cuente con acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se reciba capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

CAPITULO II

DE LOS PRINCIPIOS.

Artículo 3.- Las personas jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y demás normas legales aplicables en el Estado de Nuevo León, restringiéndose sólo en los casos y situaciones previstas en los ordenamientos jurídicos anteriormente señalados. Las personas jóvenes tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y el desarrollo del Estado. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas.

Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, gozarán de los derechos que reconoce esta Ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y obligaciones de los padres y/o tutores que para ellos contiene la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que tienen las autoridades de la Federación y del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los principios pro persona, interés superior del niño y de autonomía progresiva en el ejercicio de los mismos, tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a la Juventud, en la Ley se observarán los siguientes principios:

- I. Corresponsabilidad: deberá involucrar a los miembros de la familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, según el caso, a los jóvenes, al gobierno y a los demás sectores de la sociedad en la resolución de los problemas que aquejan a la juventud;
- II. Equidad: en el acceso y disfrute de los derechos para el desarrollo integral de los jóvenes;

- III. Igualdad: Los jóvenes pueden acceder al desarrollo integral en igualdad de condiciones;
- IV. Inclusión: las políticas públicas tomarán en cuenta las diversidad de los grupos que integran al sector de los jóvenes;
- V. No discriminación: motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
- VI. Participación: las políticas públicas en materia de juventud serán diseñadas e implementadas con la participación de este sector;
- VII. Respeto: reconocimiento a la diversidad cultural y de pensamiento;
- VIII. Solidaridad: deberá fomentarse el apoyo y la colaboración entre los jóvenes y en sus relaciones con otros grupos sociales, con la finalidad de fortalecer los vínculos de unidad y de desarrollo;
- IX. Transversalidad: que consiste en la elaboración y ejecución de estrategias, programas y acciones coordinadas o conjuntas en materia de juventud, entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos constitucionales autónomos, órganos con autonomía legal, gobierno del Estado, y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el ejercicio de la transversalidad además del Estado y los Municipios, se buscará la participación de los sectores privado y social;

- X. Universalidad: Las Juventudes gozan de los mismos derechos. Se buscará invariablemente el beneficio de la generalidad de las Juventudes, sin exclusión ni discriminación alguna motivada por cualquiera de los actos a que se refiere este artículo; y

- XI.- Cultura de la Paz: Conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos sociales.
- XII. Enfoque diferenciado según rangos de edad: Todas las políticas públicas en materia de juventud deberán contemplar las diferencias en necesidades, derechos y oportunidades de las personas jóvenes de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo, asegurando estrategias específicas para adolescentes y jóvenes adultos.
- XII. Interseccionalidad e inclusión: Se garantizará un enfoque interseccional que contemple la diversidad de juventudes, incluyendo a personas LGBTIQ+, racializadas, indígenas, trabajadoras, con discapacidad o en situación de calle, asegurando que las políticas públicas reconozcan sus condiciones particulares y promuevan su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

TÍTULO II

DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS Y SEGURIDAD PERSONALES

Artículo 4.- Los derechos y garantías de La Juventud, son inherentes a la condición de persona, y, por consiguiente, son de orden público, indivisibles e irrenunciables. Las Juventudes gozarán, sin restricción alguna, del derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio y defensa de los derechos consagrados en esta Ley, así como los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

Tratados Internacionales de los que México sea parte, leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos vigentes.

Este ordenamiento surge de lo establecido en el artículo 31 de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León en el que se establece que El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural en el Estado.

Por lo tanto, en la presente ley se establecen una serie de mecanismos para el cumplimiento de la disposición referida.

Artículo 5.- Las personas jóvenes, en su calidad de sujetos plenos de derechos, gozan de todas las garantías y libertades reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y la legislación aplicable.

Esta Ley no crea nuevos derechos, sino que establece disposiciones para garantizar su ejercicio efectivo, eliminando barreras que limitan su acceso, fortaleciendo su protección y asegurando mecanismos específicos para su desarrollo integral.

Artículo 7.- El estado y sus instituciones deberán:

- I. Garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación, asegurando que las juventudes ejerzan sus derechos sin distinción por condición económica, social, cultural, territorial o cualquier otra.
- II. Definir estrategias para el acceso universal a la educación de calidad, con énfasis en la formación integral, el uso de tecnologías de la información y la enseñanza de habilidades para el desarrollo profesional y personal.
- III. Promover el derecho a un trabajo digno y condiciones laborales justas, incluyendo el acceso a seguridad social, la regulación de prácticas profesionales y el fomento de oportunidades equitativas de empleo y emprendimiento.

- IV. Fortalecer el acceso efectivo a la salud y el bienestar, priorizando la salud mental, la atención integral y la prevención de enfermedades, con mecanismos de acompañamiento para juventudes en situación de vulnerabilidad.
- V. Garantizar el acceso a la justicia y la protección contra la violencia, asegurando que las juventudes cuenten con mecanismos de denuncia accesibles, protección ante cualquier forma de abuso y acciones afirmativas para su seguridad.
- VI. Asegurar la participación activa de las juventudes en la vida política y social, mediante espacios de representación, consulta y toma de decisiones que incidan en las políticas públicas que les afectan.
- VII. Fomentar el acceso y la apropiación del espacio público y cultural, promoviendo el deporte, el arte, la ciencia y la convivencia social en entornos seguros y accesibles.
- VIII. Proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión, garantizando el acceso a medios digitales y comunicación libre de censura o manipulación indebida.
- IX. Impulsar la autonomía y el desarrollo personal, asegurando el acceso a herramientas, conocimientos y apoyos que les permitan construir su proyecto de vida en igualdad de condiciones.
- X. Establecer mecanismos de inclusión y accesibilidad para juventudes en situación de discapacidad, en condición de calle, indígenas, racializadas o en cualquier contexto que implique desigualdad estructural.
- XI. Implementar políticas de equidad de género que erradiquen cualquier forma de discriminación, violencia o limitación en el ejercicio de derechos de las juventudes.

- XII. Promover alternativas de desarrollo más allá del ámbito académico, incluyendo el fortalecimiento de asociaciones juveniles, la capacitación para el empleo y el impulso a la innovación y el emprendimiento.

Las demás disposiciones establecidas en esta Ley deberán interpretarse y aplicarse bajo estos principios, garantizando la transversalidad y la inclusión en todas las políticas dirigidas a las juventudes.

Artículo 8.- Las políticas y programas de fomento al empleo de los jóvenes deberán dirigirse al logro de los siguientes objetivos:

CAPÍTULO II

DEL DERECHO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRABAJO

Artículo 9.- Las políticas y programas de fomento al empleo de los jóvenes deberán dirigirse al logro de los siguientes objetivos:

- I. Abrir los espacios laborales que brinden a la población juvenil oportunidades para desempeñar sus capacidades, tomando en consideración las disposiciones laborales aplicables;
- II. Promover y estimular la contratación de jóvenes trabajadores de primer empleo;
- III. Promover programas de financiamiento bajo supervisión, que permitan a los jóvenes acceder a créditos sociales para el desarrollo de sus proyectos;
- IV. Generar oportunidades laborales que no afecten la educación, salud y dignidad de los jóvenes;
- V. Garantizar la no discriminación en el empleo a las jóvenes embarazadas o en período de lactancia; así como a las y los jóvenes por su apariencia, raza, origen étnico, creencias, discapacidad, preferencias sexuales o cualquier otra; y

- VI. Promover convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para fomentar las pasantías remuneradas, vinculadas a la formación profesional de los jóvenes. Así como impulsar la creación de bolsas de trabajo y mecanismos de vinculación laboral que faciliten el acceso de las juventudes a empleos dignos con seguridad social, asegurando la participación del sector privado, académico y gubernamental en la generación de oportunidades laborales.
- VII. Reconocer como experiencia profesional las prácticas, actividades y labores realizadas por las juventudes en calidad de becarios y practicantes en programas del Instituto de la Juventud o cualquier otra institución pública o privada con convenio.
- VIII. Garantizar que las juventudes estudiantes en calidad de becarios y practicantes sean reconocidas como personas trabajadoras, asegurando sus derechos laborales y el acceso a prestaciones mínimas, con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, durante su periodo de formación, en coordinación con las instancias laborales, de seguridad social y educativas correspondientes.
- IX. Fomentar el arte, la ciencia y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las juventudes, impulsando su participación en espacios creativos, científicos y de innovación mediante becas, programas de exhibición, difusión y acceso a recursos tecnológicos.
- X. Implementar programas de formación y capacitación en tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, automatización y transformación digital, asegurando que las juventudes tengan acceso a herramientas que les permitan integrarse a los sectores productivos del futuro.
- XI. Garantizar que las juventudes estudiantes en calidad de becarios y practicantes sean reconocidas como personas trabajadoras, asegurando sus derechos laborales y el acceso a prestaciones mínimas, con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, durante su periodo de formación, en coordinación con las instancias laborales, de seguridad social y educativas correspondientes.

- XII. Fomentar el arte, la ciencia y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las juventudes, impulsando su participación en espacios creativos, científicos y de innovación mediante becas, programas de exhibición, difusión y acceso a recursos tecnológicos.
- XIII. Implementar programas de formación y capacitación en tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, automatización y transformación digital, asegurando que las juventudes tengan acceso a herramientas que les permitan integrarse a los sectores productivos del futuro.

Artículo 10.- El Ejecutivo promoverá a través de las instancias correspondientes en coordinación con el Instituto, programas que contribuyan a la capacitación laboral de los jóvenes, brindará el apoyo económico, logístico y formativo en los aspectos técnicos y profesionales para la formación de empresas productivas, así como liderazgos y organizaciones sociales de la juventud.

Así como la creación de una bolsa de trabajo en la que se incluyan a los jóvenes no importando su escolaridad, e impulsará la generación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la creación de incubadoras y aceleradoras de negocios con apoyo de organismos públicos y privados.

Promoverá en las instituciones educativas talleres de capacitación destinados al establecimiento de empresas sociales y productivas.

Asimismo, establecerá estímulos e incentivos para la contratación de jóvenes de primer empleo, conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 11.- Los jóvenes deberán contar con oportunidades que les permitan desarrollarse en un medio equitativo para incorporarse al crecimiento económico y social del Estado. El ejecutivo a través del Instituto y los órganos encargados de la juventud proveerán lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 12.- El Estado, a través de la coordinación con las dependencias que el mismo defina, garantizará el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, que

tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y vocación, y coadyuve con su desarrollo personal y profesional.

Las autoridades que sean determinadas responsables procurarán que el trabajo de las personas jóvenes no interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas jóvenes:

- a) La capacitación laboral y el empleo;
- b) Las prácticas profesionales; o
- c) El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo.

Al efecto se deberán establecer enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias afines y coordinar la puesta en marcha de las acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente capítulo.

Las dependencias y autoridades responsables tomarán en cuenta que el trabajo para las personas jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad, será motivo de las normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a las normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 13.- Para efectos de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la presente Ley, el Instituto deberá implementar un registro de empresas responsables en los términos de la presente, y establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento. Para efectos de lo cual deberá coordinarse con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Artículo 14.- Bajo ninguna circunstancia las actividades irán en detrimento de la formación técnica, académica o profesional de las personas jóvenes. Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y

técnica inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación al trabajo, incluyendo el considerado como temporal. Todas las autoridades del

Estado de Nuevo León adoptarán las medidas necesarias para ello.

Los jóvenes tienen el derecho al trabajo, así como la percepción de un salario justo, digno e igualitario en el desempeño de un trabajo igual, en puesto, jornada y condiciones de eficiencia, en un mismo centro de trabajo, y no ser objeto de ningún tipo de discriminación laboral, por razón de su edad.

Artículo 15.- El Instituto impulsará políticas públicas para la capacitación de los jóvenes con alguna discapacidad a fin de que puedan incorporarse al empleo, así como también adoptará las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a las personas jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo, y creará las políticas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de las personas jóvenes en el trabajo.

Artículo 16.- Las funciones a desempeñar como primera experiencia laboral deberán ser adecuadas a la edad, capacidades, habilidades, destrezas, al nivel de formación y preparación académica.

Artículo 17.- Las empresas que empleen, como práctica, pasantía o primera experiencia laboral a la Juventud, en los términos establecidos por la presente Ley, recibirán los beneficios que establezca la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado de Nuevo León, y el Código Fiscal para el Estado de Nuevo León. A su vez, el Estado tendrá la obligación de adecuar estos beneficios a las circunstancias y contexto actuales.

Artículo 18.- Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Estado establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente desocupadas.

Artículo 19.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en

coordinación con la secretaría del Trabajo, generará esquemas de acción para

prevenir la explotación laboral y sexual de las personas jóvenes.

Artículo 20.- El Estado promoverá, en el ámbito de sus competencias la creación de fondos y créditos accesibles para las personas jóvenes en el Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO III

DEL FORTALECIMIENTO E INCENTIVO A JÓVENES EMPRENDEDORES

Artículo 21.- El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Instituto, sus instituciones, dependencias o Entidades que por competencia corresponda, integrará y establecerá reglas y programas de operación específicos que abonen a la conformación de políticas públicas que promuevan el fomento emprendedor en el marco de esta Ley y su reglamento.

Se buscará además fomentar y promover la cultura y formación emprendedora impulsando sus temas y contenidos en los planes y programas de estudio en los planteles de los niveles de educación media superior y superior, incorporadas al Sistema Educativo del Estado de Nuevo León, así como promover y fomentar la inserción de las personas jóvenes en el Estado de Nuevo León al mundo empresarial. Asimismo, establecerá mecanismos de mejora regulatoria, compensación y estímulo que contribuyan al fomento de las personas jóvenes emprendedoras, además agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al crédito

Artículo 22.- Estado fomentará y promoverá el desarrollo productivo de las micros y pequeñas empresas o industrias, innovadoras, creativas y competitivas creadas por las personas jóvenes.

Artículo 23.- Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo anterior, el Estado deberá generar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades y estimular la capacidad emprendedora de las personas jóvenes para liberar las potencialidades creativas de las mismas, de manera que éstas puedan contribuir al sostenimiento de las fuentes productivas en el Estado de Nuevo León a un

desarrollo regional equilibrado.

Artículo 24.- Los principios por los cuales se regirán las actividades emprendedoras, son las siguientes:

- I.** Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad y desarrollo del interés por la innovación, creatividad, competitividad y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente;
- II.** Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos con responsabilidad social;
- III.** Responsabilidad por el entorno, protección y cuidado del medio ambiente, la naturaleza, sus recursos y su comunidad, y
- IV.** Difusión de los procedimientos, normas, reglas, apoyos e incentivos en los diferentes niveles de gobierno.

Artículo 25.- La Secretaría del Trabajo, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico y la de Educación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán fomentar, promover y desarrollar programas de capacitación para el manejo de las relaciones obrero-patronales y cultura laboral y jurídico administrativa mediante enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias afines, así como coordinar la puesta en marcha de las acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente capítulo.

Artículo 26.- El Estado ofrecerá apoyos a las personas jóvenes señaladas en esta ley, que desarrollen y promuevan proyectos de:

- I.** Uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger el ambiente;
- II.** Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado de agua;

- III. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia;
- IV. Desarrollo e implementación de tecnologías de vanguardia, incluyendo inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y tecnologías emergentes para optimizar procesos productivos, educativos, ambientales y sociales, y
- V. Proyectos productivos en las regiones o comunidades en los que se creen empleos para que los jóvenes se arraiguen en sus comunidades.
- VI. Fomento de la economía digital y la innovación, incentivando el desarrollo de startups, modelos de negocio digitales y soluciones tecnológicas diseñadas por juventudes;
- VII. Proyectos productivos que fortalezcan el arraigo comunitario, impulsando la permanencia de las juventudes en sus regiones mediante iniciativas sostenibles, tecnológicas y de impacto local.

CAPITULO IV

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Artículo 27.- El Estado impulsará y apoyará la creación de infraestructura y niveles educativos de calidad que permita a los jóvenes contar con instituciones educativas que propicien el pleno desarrollo de sus potenciales.

Artículo 28.- En los programas educativos se debe dar especial énfasis a la información y prevención con relación a las diferentes temáticas y problemáticas de la juventud del Estado, en particular en temas como el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana, la salud mental, los valores, las adicciones, la sexualidad responsable, VIH/SIDA, problemas psico-sociales, el sedentarismo, y los trastornos alimenticios entre otros.

Artículo 29.- La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades

del ser humano, el fomento al aprendizaje e impulso a la investigación de

conocimientos científicos y tecnológicos, motivando a la juventud para la generación de proyectos que aporten un mejor desarrollo del Estado.

Artículo 30.- Los principios y el objeto que regirán el sistema de educación de la Juventudes serán los contenidos en la Ley de Educación del Estado.

Artículo 31.- El Ejecutivo del Estado, promoverá a través de convenios de colaboración con instituciones y organismos de los sectores público y privado, así como con el apoyo de los municipios, el otorgamiento de becas y programas de apoyo a las personas jóvenes del Estado que, encontrándose en situación de alta vulnerabilidad, quieran iniciar o retomar sus estudios en el nivel medio superior y superior.

Artículo 32.- Las políticas y programas educativos dirigidos a jóvenes deberán atender los siguientes aspectos:

- I. La capacitación técnica y profesional para lograr un trabajo remunerado;
- II. Promover una educación que desarrolle y favorezca el talento y creatividad de los jóvenes;
- III. Fomentar los valores nacionales y cívicos;
- IV. Promover y asignar un presupuesto para la creación de centros que fomenten la formación profesional de los jóvenes, así como la capacitación en diversas áreas de la ciencia, las artes, oficios y la cultura;
- V. Promover y crear programas para instrumentar una educación basada en los valores que fomenten el respeto hacia las personas, así como construir una cultura de paz y no violencia;
- VI. Fomentar el conocimiento y respeto de la diversidad étnica y al patrimonio cultural;
- VII. Promover en las instituciones educativas pláticas informativas respecto a temas de interés de los jóvenes;

- VIII. Promover la creación de bibliotecas, eventos culturales y uso de nuevas tecnologías en la educación que permita a los jóvenes enriquecerse intelectualmente;
- IX. Fomentar el hábito del deporte en los jóvenes;
- X. Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas y prácticas de violencia en la educación;
- XI. Fomentar, generar y otorgar becas mediante mecanismos que garanticen que estas llegarán a sectores más vulnerables;
- XII. Promover las prácticas profesionales en los sectores públicos y privados que coadyuven a fortalecer los conocimientos de los jóvenes en las áreas de su interés;
- XIII. Promover en los medios de comunicación mensajes educativos y de reconocimiento de los derechos y obligaciones de los jóvenes;
- XIV. Facilitar la inserción de los jóvenes en los proyectos de desarrollo cultural y social;
- XV. Premiar al alumno que haya obtenido el mejor promedio de la generación del nivel superior de cada una de las Instituciones Públicas del sistema educativo estatal.

Al titular del mejor promedio de cada una de las instituciones educativas se le otorgará una beca para cursar el nivel de posgrado en universidad pública del Estado.

El titular del Ejecutivo Estatal garantizará su cumplimiento dentro de los primeros quince días del siguiente año escolar.

En caso de empate se determinará al ganador mediante procedimiento público de insaculación que realice el Instituto.

XVI. Promover la capacitación técnica y profesional para la formación de empresas productivas, así como liderazgos y organizaciones sociales;

XVII. Fomentar el emprendimiento productivo y social mediante la implementación de foros donde los jóvenes puedan elaborar y poner a prueba sus proyectos empresariales o sociales;

XVIII. Promover en las instituciones educativas talleres de capacitación destinados al establecimiento de empresas sociales y productivas; y

XIX. Promover la formación de liderazgos sociales que brinden oportunidades de capacitación, pasantías y programas voluntarios.

Artículo 33.- El Estado promoverá a través de las instancias correspondientes en coordinación con el Instituto, las políticas y establecerá los mecanismos necesarios que permitan a los jóvenes el acceso a los servicios de salud que dependan del Gobierno.

Artículo 34.- Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben tender a los siguientes aspectos:

- I. Fomentar una educación laica, gratuita y de calidad que promueva el ejercicio y respeto de los derechos humanos, que contemple la educación integral en sexualidad obligatoria en escuelas, a través de la impartición de una materia que deberá ser continua e independiente al resto del bloque del ciclo escolar; será una educación cívica que promueva el respeto y la participación en democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto y reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y cultural, y la conservación del medio ambiente;
- II. Fomentar la comprensión mutua y la cultura para la paz, con justicia,

democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre las personas jóvenes;

- III. Mejorar la educación media superior y superior en los planteles del Estado cuando corresponda, así como el desarrollo de programas de capacitación técnica y formación profesional de las Juventudes;
- IV. Prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de castigos físicos o psicológicos, sanciones disciplinarias, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la integridad física y moral de las Juventudes;
- V. Garantizar la libre asociación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles;
- VI. Promover la investigación, formación y las creaciones científicas, tecnológicas, artísticas y culturales; y
- VII. Prevenir mediante la formación educativa las causas y consecuencias que trae consigo la práctica de conductas que atentan contra el sano desarrollo de las personas jóvenes, tales como: el sedentarismo y la adopción de hábitos alimentarios inadecuados; los desórdenes y trastornos de la conducta alimentaria, el consumo de cualquier droga o sustancia psicoactiva, el embarazo no deseado, prevención del suicidio y la autolesión entre otros.

CAPITULO V

DEL DERECHO A LA SALUD

Artículo 35.- Artículo 15.- Las políticas y programas de fomento a la salud, tendrán por objeto:

- I. Garantizar la atención médica para todos los jóvenes a través de los organismos correspondientes, creando programas especiales para aquellos que no sean derechohabientes, y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, con problemas de alcoholismo,

farmacodependencia, problemas psicológicos e infecciones de transmisión sexual;

- II. Promover campañas de prevención de adicciones, de orientación de salud sexual y reproductiva, incluyendo información sobre embarazos no planeados, no deseados o en condiciones de riesgo, detección oportuna de enfermedades y la eliminación del abuso o violencia sexual;
- III. Fomentar prácticas de autocuidado enfocadas a la prevención de enfermedades;
- IV. Informar y prevenir sobre las consecuencias que genera la violencia familiar y la violencia en general;
- V. Promover el establecimiento de unidades especializadas de atención a la violencia familiar;
- VI. Promover en general la atención integral de la salud;
- VII. Promover que los responsables de los Centros de Salud, hospitales, Centros Quirúrgicos públicos o privados, brinden asistencia inmediata a los jóvenes lesionados o enfermos en caso de urgencia;
- VIII. Fomentar el acceso a programas de orientación, atención psicológica y prevención del suicidio, con la finalidad de evitar este tipo de conductas; además de canalizar a quien lo requiera a la Secretaría de Salud para recibir tratamiento necesario;
- IX. Promover campañas relacionadas a la difusión y fortalecimiento de la salud mental;
- X. La priorización de la salud mental en todas las políticas públicas de juventud, asegurando el acceso gratuito a servicios de atención psicológica, campañas de prevención y programas de apoyo emocional en instituciones educativas y espacios comunitarios; y
- XI. Promover que en los centros de salud públicos se entreguen de manera gratuita preservativos y anticonceptivos; que se diseñen e

impartan cursos de salud sexual y reproductiva y las consecuencias y riesgos de los embarazos no planeados, no deseados o en condiciones de riesgo.

Artículo 35.- Los principios bajo los cuales se regirá lo dispuesto en el presente capítulo serán los contenidos en la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Nuevo León, la Ley Estatal de Salud, y en la Ley de Salud Mental del Estado de Nuevo León.

Artículo 36.- Ante cualquier conflicto de leyes, prevalecerán las disposiciones que sean establecidas en los ordenamientos mencionados con anterioridad. Siempre y cuando lo anterior no implique privar de la protección o beneficio mas amplio al sujeto de los derechos contenidos.

Artículo 36.- El Estado diseñará y promoverá la realización de campañas permanentes e intensivas dirigidas a las personas jóvenes, a fin de prevenir el sobrepeso, la obesidad y otros patrones alimenticios y de actividad no saludables.

Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen derecho a solicitar y recibir información y atención a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León para conocer las medidas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así como de los patrones alimenticios y de actividad no saludables.

Artículo 38.- El Ejecutivo promoverá y establecerá a través del Instituto y las instancias correspondientes, políticas y mecanismos que garanticen el acceso expedito de los jóvenes a los servicios de información, orientación y atención relacionados con el ejercicio de sus derechos sexuales reproductivos, y desarrollará acciones que divulguen información referente a temáticas de salud prioritarias para los jóvenes, como adicciones, enfermedades de transmisión sexual, nutrición, salud pública, salud mental, embarazos no planeados, no deseados o en condiciones de riesgo, entre otras; con la finalidad de formar una juventud más responsable.

Artículo 39.- Las personas jóvenes tienen derecho al libre desarrollo de su sexualidad, por lo tanto, el Estado, a través del Instituto establecerá las políticas necesarias en educación para que la juventud tenga la información suficiente para el libre ejercicio de este derecho, a través de la capacitación del personal que impartirá la materia a fin de que fomente un aprendizaje seguro y eficaz. La

información deberá ser clara, completa, fundamentada en evidencia científica y libre de prejuicios, estereotipos y apropiada a su edad. Asimismo, será viable el acompañamiento y participación de padres o tutores en el proceso de enseñanza.

Artículo 40.- El Gobierno con base en lo dispuesto por la Ley General de Salud adoptará e implementará políticas de educación integral de la sexualidad, estableciendo planes y programas que aseguren la información culturalmente relevante, completa, científicamente rigurosa y, fundamentada en evidencia, así como libre de prejuicios.

Artículo 41.- El Estado, a través de la Secretaría de Salud, promoverá y evaluará, en los servicios médicos de salud del primer nivel, un modelo de prevención y atención a la salud sexual y salud reproductiva que se enfoque a la población joven, principalmente a las mujeres jóvenes para consolidar que estos servicios sean amigables y respetuosos de su integridad física y psicológica, así como que se cuente con su consentimiento libre e informado.

El Estado generará y ejecutará programas de capacitación formal, dirigidos al personal médico, paramédico y administrativo, a fin de que otorguen sus servicios con perspectiva juvenil y de género, en especial en los relativos a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva.

El Estado pondrá a disposición gratuita el cuadro básico de anticonceptivos en los centros de salud del Estado para las personas jóvenes, asegurándose que reciban la información y la asesoría correspondiente sobre cada método y sus riesgos para la salud, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Artículo 42.- Las personas jóvenes tienen derecho al acceso, tránsito y permanencia en servicios de salud sexual y salud reproductiva de la más alta calidad, amigables, gratuitos y confidenciales, con acceso a métodos y tecnologías anticonceptivas, independientemente de su orientación y preferencia sexual, identidad de género o expresión de rol de género.

Artículo 43.- El Estado, a través del Instituto, en coordinación con la Secretarías de Salud y de Educación del Estado, establecerán campañas informativas, no estereotipadas, diversas y laicas, sobre los riesgos y la prevención de

- I. El inicio involuntario o desprotegido de su vida sexual;

- II. Embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo;
- III. La exposición a enfermedades de transmisión sexual y;
- IV. Las que establezcan otras leyes y reglamentos.

Estás campañas deberán garantizar la difusión de los servicios de salud integrales de calidad, así como la del derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en los supuestos permitidos en el Código Penal vigente en el Estado, y en las Normas Oficiales Mexicanas, cuando la mujer o persona gestante interesada así lo solicite.

Artículo 44.- El Estado apoyará y orientará en el ámbito de sus facultades, a que las personas jóvenes cuenten con servicios médicos, jurídicos e informativos, que les permitan construir la identidad sexogenérica que deseen.

El Gobierno proporcionará en la medida de sus posibilidades operativas y presupuestales los servicios de orientación sexual integral a las personas jóvenes que les permita abordar, asumir y ejercer su identidad sexo-genérica.

CAPITULO VI

DEL DERECHO A LA IGUALDAD, INCLUSIÓN, Y PROTECCIÓN SOCIAL

Artículo 45.- Los jóvenes en situaciones de desventaja social, como pobreza, indigencia, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, privación de la libertad, exclusión social y étnica, entre otras, tienen derecho a reinserirse e integrarse plenamente a la sociedad y a ser sujetos de derechos y oportunidades; ser beneficiarios de los programas que el Estado a través del Instituto de la Juventud y las instancias correspondientes desarrollen y fomenten, los cuales les permitan acceder a servicios y beneficios sociales que mejoren su calidad de vida.

Artículo 46.- Son derechos de los jóvenes con discapacidad, además de los reconocidos en las normativas vigentes aplicables, los siguientes:

- I. Acceder en igualdad a la capacitación laboral y su incorporación a la vida productiva;
- II. Contar con el apoyo del Instituto, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás entidades estatales y municipales en lo relativo a la garantía, ejercicio y respeto de sus derechos;

- III. Desplazarse libremente y con seguridad en los espacios públicos y en el transporte de pasajeros;
- IV. Recibir educación libre de barreras culturales y sociales.
- V. Los demás derechos reconocidos en esta Ley y otros ordenamientos vigentes.

La autoridad competente deberá procurar los recursos y medios que sean necesarios para garantizar que los jóvenes con discapacidad puedan desplazarse libremente y con seguridad en los espacios públicos.

Artículo 47.- Son derechos de las personas Jóvenes en situación de calle, los siguientes:

- I. Ser protegidos de los riesgos de la calle y recibir la atención y orientación especial en problemáticas sociales por parte de los organismos responsables de la seguridad pública;
- II. Recibir orientación de las instituciones públicas o privadas que atienda esta problemática, para solucionar sus problemas de sobrevivencia, seguridad personal y, salvaguarda de sus derechos que rebasen sus capacidades propias de solución;
- III. Tener acceso, al ingreso, reingreso y la permanencia a los servicios de educación, y a la capacitación para el trabajo;
- IV. Recibir información y orientación para la protección de sus derechos;
- V. Recibir información respecto de los programas de desarrollo social y humano; así como a ser sujetos y beneficiarios preferentemente de las políticas, programas y acciones que se implementen en esta materia;
- VI. Hacer uso de las manifestaciones culturales de su preferencia, en los espacios establecidos para ello;
- VII. Recibir apoyo y orientación para la realización de trámites administrativos y

legales; y

VIII. Los demás que contribuyan a su desarrollo armónico e integral.

Artículo 48.- las autoridades competentes implementarán acciones necesarias para que las personas jóvenes que viven y sobreviven en calle y víctimas de Trata de Personas y Explotación Humana cuenten con programas de atención especializados para su atención médica, jurídica, y su rehabilitación física y psicológica, en términos de lo establecido en la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 49.- Las autoridades competentes implementarán las acciones necesarias para que las personas jóvenes que viven y sobreviven en calle y víctimas de Trata de Personas y Explotación Humana cuenten con programas de atención integral para su atención médica, jurídica, y su rehabilitación física y psicológica, en términos de lo establecido en la normatividad aplicable.

Artículo 50.- El Estado, mediante la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, elaborará un registro de las instituciones de asistencia, albergues, centros de acogida y centros de rehabilitación y tratamiento de adicciones que atiendan a personas jóvenes en el Estado. El registro señalado lo utilizará el Instituto de Asistencia Social e Integración Social para realizar un proceso de certificación de dichas instituciones con base en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 51 - El Ejecutivo del Estado, en coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud y las dependencias competentes, podrá implementar programas específicos dirigidos a las juventudes que radiquen en el Campo o zonas Rurales del Estado, con el objetivo de garantizar su acceso equitativo a oportunidades de desarrollo. Para ello, se deberán establecer:

- I. Programas de formación y capacitación técnica y profesional para juventudes rurales en áreas estratégicas como agricultura

sustentable, tecnología aplicada al campo, emprendimiento y acceso a mercados.

- II. Incentivos y apoyos a jóvenes emprendedores rurales que promuevan el desarrollo de proyectos productivos en sus comunidades.
- III. Acceso a infraestructura digital y conectividad que permita reducir la brecha digital y facilite la integración de las juventudes del campo en el desarrollo económico y social del Estado.
- IV. Coordinación con instituciones educativas y organismos especializados para garantizar la permanencia de las juventudes rurales en el sistema educativo y su acceso a becas, apoyos y espacios de formación.
- V. Fortalecimiento de políticas de empleo rural para jóvenes, asegurando condiciones de trabajo digno y oportunidades de crecimiento dentro de sus comunidades.

CAPÍTULO VII

ACCIONES PARA CONTRARRESTAR LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Artículo 52.- Para contrarrestar la deserción escolar de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, el Estado establecerá acciones específicas en coordinación con el Instituto de la Juventud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como con los municipios y las instancias correspondientes, en las que se deberán observar los siguientes aspectos:

- I. Se buscará la implementación de programas que garanticen el acceso, el reingreso y la permanencia en el sistema educativo en el Estado, enfocados a contrarrestar el analfabetismo y erradicar la deserción escolar

- II. Canalizar la situación de cada joven, para que se otorguen los apoyos a los requerimientos específicos de aquellos que desertaron del sistema educativo y que se encuentren en desventaja social, para establecer una política de reingreso y que se garantice su permanencia;
- III. Acciones tendientes a contrarrestar desventaja social, como pobreza, indigencia, marginación, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, exclusión social y étnica de los jóvenes que desertaron del sistema educativo;
- IV. Para las familias de los jóvenes que por cuestión económica hayan desertado de sus estudios, y que se encuentren en aquellas localidades aisladas y zonas urbanas, identificadas con alta vulnerabilidad, el Estado llevará a cabo las acciones de atención y asistencia personalizada, en relación a asistencia jurídica, económica, social, médica, psicológica, educativa, laboral y cualquier otro aspecto que mejore su calidad de vida y puedan permanecer activos en el sistema educativo;
- V. Las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de las acciones y programas que ayuden a contrarrestar la deserción escolar en los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

CAPÍTULO VIII

DEL DERECHO A LA CULTURA, AL ARTE, A LA CIENCIA Y A LA RECREACIÓN.

Artículo 53.- El Estado promoverá a través del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León en coordinación con el Instituto y las instancias correspondientes la promoción de las expresiones culturales de los jóvenes del Estado, y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional.

Artículo 54.- El Estado, a través de la Secretaría de la Cultura y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, promoverá los medios para la difusión y

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa de las personas jóvenes en los términos de esta Ley, y la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.

Artículo 55.- El Estado, a través del Programa, diseñará programas para el acceso masivo de las personas jóvenes a distintas manifestaciones culturales, mediante un

sistema de promoción y apoyo, enfatizando en el rescate de elementos culturales de los sectores populares y de los pueblos originarios o indígenas asentados en el Estado.

Artículo 56.- El Estado garantizará, en el ámbito de sus atribuciones, el fomento, la promoción y protección de creaciones y expresiones artísticas y científicas de las personas jóvenes, el intercambio cultural y científico a nivel delegacional, del Estado y nacional.

Artículo 57.- El Estado garantizará el diseño de los programas tendentes a promover, fomentar y garantizar las expresiones científicas, creativas, culturales y artísticas de las personas jóvenes, promoviendo la participación juvenil libre.

Artículo 58.- Las personas jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, al descanso y al esparcimiento. Este derecho será considerado como factor indispensable para el desarrollo integral de las personas jóvenes.

Artículo 59.- El Estado, por medio del Instituto, implementará políticas y programas que promuevan el ejercicio de estos derechos mediante las unidades adscritas a su cargo. Por ninguna razón se podrá imponer a las personas jóvenes regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que menoscaben este derecho. El Estado deberá garantizar adecuadamente la seguridad de las personas jóvenes en el disfrute de sus espacios y actividades recreativas.

Artículo 60.- El Estado en el Programa fomentará la implementación de programas de capacitación, normativas, protocolos e instrumentos que eviten que las autoridades policiacas y encargadas de la seguridad pública adopten posturas prejuiciosas o represivas contra la recreación de las personas jóvenes, sin el apego a los principios del debido proceso, el uso debido de la fuerza, el respeto de los bienes jurídicos propios o ajenos, o que provoquen el trato violento, inhumano, cruel

o degradante hacia las personas jóvenes que participan en las mismas.

Artículo 61.- El Estado en el Programa diseñará y promoverá una política de recreación que, entre otras, considere el acceso de las personas jóvenes a espacios, prácticas y modalidades de uso del tiempo libre y la recreación de acuerdo a sus intereses y con estricto apego a la legalidad y al respeto a sus derechos humanos.

CAPÍTULO IX

DEL DERECHO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Artículo 62.- La presente Ley reconoce el derecho de las personas jóvenes al acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación como un elemento esencial para su desarrollo integral, participación social, educación, acceso a la información y ejercicio de sus derechos digitales.

Artículo 63.- Las políticas públicas en materia de juventud procurarán que las personas jóvenes del Estado de Nuevo León cuenten con:

- I. Fomentar la provisión de infraestructura, conectividad y herramientas digitales en condiciones de igualdad para todas las juventudes del Estado, con especial atención a las zonas de alta marginación y comunidades vulnerables.
- II. Implementar programas de educación digital que permitan a las personas jóvenes desarrollar habilidades en el uso seguro, ético y eficiente de las Tecnologías de la Información y Comunicación, promoviendo la ciberseguridad y la protección de datos personales.
- III. Procurar el respeto y la promoción de los derechos de las juventudes en el ámbito digital, incluyendo la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, el acceso a información veraz y el uso responsable de las plataformas digitales.
- IV. Desarrollar y fortalecer estrategias de detección y prevención de

contenidos digitales que vulneren los derechos de las juventudes, tales como la violencia digital, la discriminación, el acoso, la explotación y la difusión de información falsa.

- V. Establecer espacios y mecanismos para que las juventudes puedan ejercer su derecho a la participación en asuntos de interés público a través de medios digitales, asegurando su representación en el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia.
- VI. Fomentar medidas para la prevención y atención de riesgos asociados al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluyendo la adicción a las plataformas digitales, la desinformación, la ciber violencia y la explotación en línea de personas jóvenes.
- VII. Crear incentivos y mecanismos de apoyo para la formación y consolidación de proyectos de emprendimiento digital liderados por juventudes, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo tecnológico en el Estado.
- VIII. Desarrollar políticas, estrategias y acciones para la implementación efectiva de los derechos digitales de la juventud, priorizando la inclusión, la accesibilidad y la seguridad en el entorno digital.

Artículo 64.- Se promoverá la colaboración entre el sector público, privado y social para garantizar que las juventudes del Estado cuenten con oportunidades de formación, acceso a infraestructura digital y participación en la gobernanza de internet, asegurando que las Tecnologías de la Información y Comunicación sean una herramienta para su bienestar y desarrollo.

CAPITULO X

DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD Y DE LA CULTURA DE LA PAZ

Artículo 65.- Las políticas de promoción de la equidad tendrán como objetivo generar condiciones que garanticen la igualdad sustantiva de todas las juventudes, reconociendo y atendiendo las barreras estructurales que limitan su desarrollo. Estas políticas deberán considerar la diversidad de experiencias, garantizando el acceso a derechos y oportunidades sin distinción ni discriminación.

En particular, se dirigirán a:

- I. Eliminar desigualdades de género, promoviendo el acceso equitativo a derechos, oportunidades y recursos en todos los ámbitos de la vida social, educativa, económica y política.
- II. Romper los ciclos de pobreza y exclusión, asegurando que las juventudes en situación de marginación cuenten con herramientas y condiciones efectivas para su desarrollo integral.
- III. Garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades, reconociendo y combatiendo cualquier forma de exclusión basada en origen étnico, cultural, territorial o cualquier otra condición que limite el ejercicio pleno de la ciudadanía.
- IV. Asegurar la inclusión plena de juventudes con discapacidad, promoviendo ajustes razonables, accesibilidad universal y medidas de apoyo que les permitan ejercer su autonomía y derechos en igualdad de condiciones.
- V. Implementar estrategias de salud, bienestar y acompañamiento para juventudes con condiciones de salud crónicas o de atención prioritaria, garantizando su acceso a tratamientos, inclusión social y oportunidades de desarrollo sin discriminación.

Artículo 66. - Las políticas de promoción de la cultura de la paz buscarán impulsar el desarrollo de la juventud bajo las siguientes finalidades:

- I. Difundir el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad;

- II. Motivar la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en valores inherentes al respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, favoreciendo en todo caso la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia;
- III. Alentar programas e iniciativas que canalicen las relaciones solidarias y de cooperación de las personas jóvenes;
- IV. El reconocimiento de la dignidad humana y el valor inherente a los derechos iguales e inalienables de todas las personas jóvenes; y
- V. Promover mecanismos de resolución de controversias mediante negociación y mediación ante alguna problemática social.

CAPITULO XI DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD

Artículo 67.- Los Municipios que conforman el Estado de Nuevo León deberán crear y operar un Instituto Municipal de la Juventud o, en su defecto, una Unidad Administrativa especializada en materia de juventud, dentro de su estructura gubernamental. Estos institutos serán responsables de la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a las juventudes, asegurando su participación en la toma de decisiones. Además, deberán desarrollar y ejecutar el Programa Municipal de Juventud, en alineación con las bases generales establecidas en el Programa Estatal de la Juventud.

Artículo 67.- Los municipios podrán deberán, atendiendo a sus atribuciones y competencias, participar en la elaboración, revisión y seguimiento del Programa Estatal de la Juventud.

Los municipios podrán crear Consejos Juveniles Municipales de carácter honorífico, a efectos de dar seguimiento a lo señalado en el párrafo anterior, así como promover políticas públicas que beneficien a los jóvenes en su respectivo territorio.

CAPITULO XII DEL PROGRAMA ESTATAL DE LA JUVENTUD

Artículo 68.- El Instituto será el responsable de la elaboración del Programa Estatal de la Juventud, y garantizará la participación de la juventud en su elaboración y consulta a través de los órganos encargados de la juventud en los municipios, así como de especialistas, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones juveniles, civiles e instituciones de asistencia privada, representantes populares y demás sectores sociales que tengan que ver con la temática juvenil, para la cual se deben llevar a cabo foros, conferencias, seminarios, reuniones de trabajo, recorridos y demás mecanismos que se consideren necesarios para cumplir con este fin.

Artículo 69. - El Programa deberá contener estrategias, acciones y lineamientos para garantizar los derechos establecidos en esta Ley, considerando los siguientes aspectos.

I. Empleo y Desarrollo Económico

- a) Creación de un sistema de empleo que incluya bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, así como convenios y estímulos fiscales con empresas públicas y privadas;
- b) Protección del empleo juvenil, asegurando la regulación del trabajo de menores de edad y una supervisión adecuada;
- c) Lineamientos para la conservación y protección del empleo juvenil, promoviendo estímulos para la contratación de jóvenes en su primer empleo;
- d) Implementación de programas para fomentar el emprendimiento juvenil mediante la creación de incubadoras de empresas;
- e) Establecimiento de mecanismos que garanticen los derechos laborales de los jóvenes sin menoscabar su condición social o económica; y
- f) Acciones para prevenir la discriminación laboral de las y los jóvenes.

II. Educación y Capacitación

- a) Implementación de un sistema de becas e intercambios académicos nacionales y extranjeros;

- b) Creación de un programa de becas de posgrado para juventudes con promedio superior a 90 sobre 100, con posibilidad de aplicación para estudios en el extranjero, garantizando equidad en el acceso para zonas rurales y sectores vulnerables; y
- c) Acciones afirmativas para garantizar la inclusión y continuidad educativa en zonas de marginación y grupos en situación de vulnerabilidad.

III. Salud y Bienestar

- a) Generación y divulgación de información sobre adicciones, VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual, nutrición, salud mental, salud pública y comunitaria;
- b) Programas de prevención y atención del tabaquismo, alcoholismo, ludopatía y drogadicción; y
- c) Creación de centros de orientación integrales para juventudes, enfocados en violencia, salud y bienestar, incluyendo orientación vocacional, mentoría y desarrollo personal.

IV. Cultura, Deporte y Recreación

- a) Creación y mantenimiento de espacios deportivos y culturales para jóvenes;
- b) Promoción del arte urbano y otras expresiones artísticas juveniles;
- c) Implementación de mecanismos para el acceso a actividades de turismo juvenil; y
- d) Fomento al deporte y promoción de espectáculos deportivos mediante un sistema de apoyo a iniciativas deportivas juveniles.

V. Participación y Derechos Juveniles

- a) Implementación de mecanismos para que los jóvenes reciban atención, orientación e información sobre sus derechos en todas las instituciones públicas del Estado;

- b) Acciones afirmativas para jóvenes en situación de marginación socioeconómica, rural o urbana y de atención prioritaria;
- c) Estrategias para fomentar la organización juvenil autónoma, democrática y socialmente comprometida;
- d) Creación, promoción y apoyo de un sistema de información juvenil accesible y actualizado; y
- e) Uso del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León para la difusión de información relevante sobre los derechos y oportunidades de las juventudes.

VI. Inclusión y Accesibilidad

- a) Implementación de programas para la autosuficiencia e inclusión de jóvenes con discapacidad;
- b) Establecimiento de medidas de asistencia y cuidado para jóvenes con discapacidad, tomando en cuenta la situación económica de sus padres o tutores; y
- c) Estrategias para evitar la deserción escolar en jóvenes en situación de vulnerabilidad, conforme a lo establecido en el artículo 34 BIS de la presente Ley.

VII. Infraestructura y Espacios Juveniles

- a) Creación de espacios públicos accesibles para todas las juventudes, diseñados bajo criterios de accesibilidad, inclusión y seguridad;
- b) Priorización de la infraestructura juvenil en zonas con altos índices de marginación; y
- c) Habilitación de espacios recreativos para garantizar el derecho al esparcimiento, la cultura, el deporte y la convivencia social, independientemente de la situación académica de las juventudes.

VIII. Implementación de cualquier otro mecanismo o estrategia contemplado en la presente Ley que contribuya al desarrollo y bienestar de la juventud.

Artículo 70. - Las instituciones gubernamentales a las que se refiere la presente Ley implementarán periódicamente campañas de difusión de los derechos de la juventud, en el ámbito de su competencia.

Artículo 71.- El Programa Estatal de la Juventud dentro de sus lineamientos debe contemplar mecanismos para el estudio, la sistematización, la promoción y el fortalecimiento de las diferentes identidades juveniles que coexisten en el Estado.

Artículo 72.- Todos los programas, acciones y actividades implementadas por las instancias gubernamentales deberán ser medibles y deberán contar con un registro anual de resultados y metas trazadas, el cual podrá ser consultado por el público

en general en el portal de gobierno del Estado.

Artículo 73.- El Instituto deberá realizar la elaboración, evaluación y actualización del Programa Estatal de Juventud cada tres años, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Estado.

CAPÍTULO XIII

DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 74.- El Premio de la Juventud del Estado de Nuevo León será convocado una vez al año y se entregará a colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas que se hayan destacado en la defensa y promoción de los derechos de las personas jóvenes.

El premio de la Juventud del Estado de Nuevo León se otorgará en las siguientes distinciones:

- I. Actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación;
- II. Actividades culturales y artísticas;
- III. Actividades deportivas;
- IV. Mérito cívico, político o ambiental;
- V. Mérito por la promoción y defensa de los derechos humanos.

- VI. Merito por la promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, y**
- VII. Mérito por la promoción y defensa de la igualdad de Género.**

Artículo 75.- Los órganos encargados de emitir la convocatoria y las bases respectivas serán el Instituto, en coordinación con la Comisión de la Juventud del H. Congreso del Estado de Nuevo León, emitiendo la misma el primer trimestre del año, para ser entregado el 12 de agosto del mismo ejercicio fiscal que se convoque.

Artículo 76.- El órgano encargado de evaluar las propuestas para este premio, será un Jurado Calificador, el cual será designad a manera que sea establecido en el reglamento de la presente, y estará compuesto por:

- I. La persona titular del Instituto de la Juventud;**
- II. Un representante del Consejo Joven, quien será designado por sus integrantes y bajo el procedimiento que ellos estipulen;**
- III. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León;**
- IV. Una persona representante de una universidad privada con presencia en el Estado.**
- V. Una persona representante del sector productivo o empresarial.**
- VI. Una persona representante de la sociedad civil organizada, con experiencia en trabajo juvenil, derechos humanos o desarrollo comunitario, designada mediante convocatoria pública del Instituto Estatal de la Juventud.**
- VII. Un representante del Instituto Mexicano de la Juventud.**
- VIII. La Presidencia de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado de Nuevo León.**

El presidente del Jurado Calificador será el o la Titular del Instituto, quien será el responsable de convocar a las sesiones.

Para efectos de la designación de la persona representante de la universidad privada a la que hace mención la fracción III, esa posición será rotativa de manera anual, entre las universidades privadas de más prestigio en el Estado de Nuevo León.

Para la configuración del jurado se garantizará la paridad e igualdad de género.

Artículo 77.- El Jurado sesionará válidamente, tomará decisiones, dictaminará y votará con la mayoría de sus integrantes; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos.

Artículo 78.- Las personas que integran el jurado están obligadas a guardar reserva sobre los asuntos de que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 79.- El Premio de la Juventud del Estado de Nuevo León será entregado en sesión solemne que deberá celebrarse, con este único objeto, ante el pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, durante el primer periodo de sesiones ordinarias, de cada año legislativo, según establezca el reglamento de la Presente Ley.

Artículo 80.- El Jurado tendrá las atribuciones que señale el Reglamento.

CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES

Artículo 81.- El incumplimiento de esta Ley será sancionado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y la reglamentación aplicable.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se deroga la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial Número 100 de fecha 28 de julio de 2008, bajo el decreto Núm. 251

TERCERO. Los municipios del Estado de Nuevo León deberán armonizar o emitir sus reglamentos y normativas en materia de juventud en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley

CUARTO. El Ejecutivo del Estado, a través del Instituto Estatal de la Juventud y las dependencias competentes, deberá adecuar o emitir el Reglamento de la presente Ley dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

QUINTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto asignado y aprobado en el apartado correspondiente en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal en curso. En caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los entes ejecutores, ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto autorizado para el presente Ejercicio Fiscal ni subsecuentes como consecuencia de la publicación de este Decreto.

A día 13-trece de febrero del año 2025-dos mil veinticinco, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

SUSCRIBEN


Diputada Marisol González Elías.

Integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano.


Edelmiro Cavazos Valdés

Director general del Instituto Estatal de la Juventud



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. BALTAZAR GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 5, 8 y 16 de la Ley Estatal del Instituto de la Juventud.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUVENTUD

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor

**PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .**



Quienes suscriben, **Diputado Baltazar Gilberto Martínez Ríos, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado**, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en sus artículos 86 y 87, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberanía, **iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 5, el inciso b) de la fracción IV del artículo 8, el inciso c) de la fracción III del artículo 16, de la Ley Estatal del Instituto de la Juventud**, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de septiembre de 2021, este Poder Legislativo aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, publicada el 02 de octubre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado, cuya vigencia inició a partir del 04 de octubre del mismo año.

Dicha Ley consta de 6 títulos, 55 artículos ordinarios y 12 artículos transitorios.

Entre las modificaciones más relevantes en comparación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de fecha 02 de octubre de 2009, abrogada, se destaca la estructura orgánica del Gabinete de la Administración Pública Estatal en ejercicio constitucional, a saber:

- a) **Gabinete del Gobernador**, integrado por la Oficina Ejecutiva, la Secretaría Particular, la Consejería Jurídica, la Gerencia de Proyectos, la Oficina de Nuevo León en la Ciudad de México, el Sistema Estatal de Información y el Área de Comunicación.
- b) **Gabinete de Buen Gobierno**, conformado por las Secretarías de Finanzas y Tesorería General del Estado, Participación Ciudadana, Administración, Contraloría y Transparencia Gubernamental y Seguridad Ciudadana.
- c) **Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible**, del que forman parte las Secretarías de Economía, Trabajo, Desarrollo Regional y Agropecuario, Movilidad y Planeación Urbana, Igualdad e Inclusión, Educación, Salud, Mujeres y Cultura.

Luego entonces, con motivo de la reestructuración y reorganización del Gabinete Estatal, algunas Secretarías que se encontraban unidas, se dividieron competencialmente instituyéndose de manera individual, tal es el caso, de la Secretaría de Economía y del Trabajo; otras cambiaron su denominación, por ejemplo, las entonces, Secretarías de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Social se transformaron en la Secretarías de Medio Ambiente y de Igualdad e Inclusión, respectivamente.

Es así, que, con el propósito de evitar confusiones respecto a las nuevas denominaciones y funciones de las creadas Secretarías, los artículos quinto y sexto transitorios del referido Decreto 006, cuyos términos textuales son idénticos, señalan en su contenido:

“Las referencias, atribuciones, asuntos o funciones conferidas en otros ordenamientos jurídicos o instrumentos contenidos en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición que hagan mención a las Secretarías que con motivo del Presente Decreto se modifican, se entenderán hechas de la siguiente manera:

- a) Secretaría de Economía y Trabajo, por lo que hace a las facultades de Economía, a la Secretaría de Economía;*
- b) Secretaría de Economía y Trabajo, por lo que hace a las facultades de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo;*
- c) Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de igualdad e inclusión;*
- d) Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que hace a las facultades de medio ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente;*
- e) Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a la Secretaría de Desarrollo Regional;*
- f) Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que hace a las facultades de movilidad, transporte y desarrollo urbano, así como la Secretaría de infraestructura, a la Secretaría de Movilidad."*

Bajo este contexto, si bien, los dispositivos invocados abonan a la orientación interpretativa, lo cierto es, que este tipo de modificaciones normativas requieren de una homologación integral dentro de nuestro marco normativo, a fin de considerar plenamente cumplimentada la vertiente de seguridad y certeza jurídica del principio constitucional de legalidad.

Por otra parte, consideramos que a pesar de que las personas somos diferentes y vivimos realidades distintas, es obligación de las organizaciones públicas crear condiciones que promuevan la igualdad en el ejercicio de sus derechos y evitar cualquier distinción que dé como resultado la humillación, maltrato o exclusión.

Al respecto, estimamos que el lenguaje es una expresión fundamental de nuestros pensamientos, y al mismo tiempo, un reflejo de nuestra sociedad y nuestra cultura. Sin embargo, también ha sido por muchos años una fuente de violencia simbólica contra la mujer y las niñas; un instrumento sumamente eficaz para invisibilizarlas y discriminarlas, naturalizando así, su desigualdad histórica y estructural. De ahí la importancia de utilizar un lenguaje incluyente, no binario como una medida para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Dicho lo anterior, resulta imperante mencionar que, de una lectura integral de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, primer instrumento internacional vinculante que reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, ratificado por el Estado Mexicano en fecha 19 de enero de 1999, se desprende la obligación por parte de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género.

En esa tesitura, cobra relevancia la tesis de jurisprudencia¹ con número de registro digital 2011430, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido, obedecen a:

**ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de

¹ Tesis de Jurisprudencia 1ª/J. 22/2016 (10ª), visible en la página 836 del Libro 29, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011430>

género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) **considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.**

Pues como se puede observar, los órganos jurisdiccionales para garantizar el acceso de la justicia en condiciones de igualdad, entre otros aspectos, deben observar el método que exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje incluyente basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

De modo tal, que al ser los ordenamientos jurídicos la base para la impartición de justicia, resulta trascendente y fundamental que su redacción facilite la misma, es por ello que proponemos la presente reforma a **Ley Estatal del Instituto de la Juventud**, con el objeto de homologar las referencias hechas hacia las distintas Secretarías que forman parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo con las descritas en la Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, publicada el 02 de octubre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado y a su vez, incluir un lenguaje incluyente en la conformación de la Junta de Gobierno y del Consejo Joven de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de la Juventud.

Para mayor comprensión, la modificación legislativa de mérito se ilustra de la siguiente manera:

LEY ESTATAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:	Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

<p>I. ... a la VI. ...</p> <p>VII. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social, para la elaboración de un estudio de las zonas de marginación rural o urbana y de atención prioritaria donde radiquen jóvenes, con el objeto de realizar las acciones necesarias de desarrollo social para impulsar condiciones de igualdad de oportunidades real y efectiva.</p> <p>VIII. ... a la XXVIII. ...</p>	<p>I. ... a la VI. ...</p> <p>VII. Coordinarse con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, para la elaboración de un estudio de las zonas de marginación rural o urbana y de atención prioritaria donde radiquen jóvenes, con el objeto de realizar las acciones necesarias de desarrollo social para impulsar condiciones de igualdad de oportunidades real y efectiva.</p> <p>VIII. ... a la XXVIII. ...</p>
<p>Artículo 8.- El Consejo Joven de Participación Ciudadana estará integrado por:</p> <p>I. ... a la III. ...</p> <p>IV. Veintisiete Vocales Consejeros, con voz y voto, que serán los siguientes:</p> <p>a) ...</p> <p>b) El Secretario de Desarrollo Social;</p> <p>c) El Secretario del Trabajo;</p> <p>d) ...</p> <p>f) ...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 8.- El Consejo Joven de Participación Ciudadana estará integrado por:</p> <p>I. ... a la III. ...</p> <p>IV. Veintisiete Vocales Consejeros, con voz y voto, que serán los siguientes:</p> <p>a) ...</p> <p>b) La persona titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión;</p> <p>c) La persona titular de la Secretaría del Trabajo;</p> <p>d) ...</p> <p>f) ...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>Artículo 16.- La Junta de Gobierno se integrará por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:</p> <p>I. El Titular del Ejecutivo del Estado, quien la presidirá;</p>	<p>Artículo 16.- La Junta de Gobierno se integrará por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:</p> <p>I. La persona titular del Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;</p>

<p>II. El Director General del Instituto, quien tendrá el carácter de Secretario de la Junta; y</p> <p>III. Cinco vocales, que serán:</p> <p>a) El Secretario General de Gobierno;</p> <p>b) El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado;</p> <p>c) El Secretario de Desarrollo Económico;</p> <p>d) El Secretario de Educación,</p> <p>e) El Secretario de Salud, y</p> <p>f) ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>II. La persona titular de la Dirección General del Instituto, quien tendrá el carácter de Secretario de la Junta; y</p> <p>III. Cinco vocales, que serán:</p> <p>a) La persona titular de la Secretaría General de Gobierno;</p> <p>b) La persona titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;</p> <p>c) La persona titular de la Secretaría de Economía;</p> <p>d) La persona titular de la Secretaría de Educación;</p> <p>e) La persona titular de la Secretaría de Salud; y</p> <p>f) ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
---	---

Expuesto lo anterior, sometemos ante Ustedes compañeros el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman la fracción VII del artículo 5, el inciso b) de la fracción IV del artículo 8, el inciso c) de la fracción III del artículo 16, de la Ley Estatal del Instituto de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. ... a la VI. ...

VII. Coordinarse con la **Secretaría de Igualdad e Inclusión**, para la elaboración de un estudio de las zonas de marginación rural o urbana y de atención prioritaria donde radiquen jóvenes, con el objeto de realizar las acciones necesarias de desarrollo social para impulsar condiciones de igualdad de oportunidades real y efectiva.

VIII. ... a la XXVIII. ...

Artículo 8.- El Consejo Joven de Participación Ciudadana estará integrado por:

I. ... a la III. ...

IV. Veintisiete Vocales Consejeros, con voz y voto, que serán los siguientes:

a) ...

b) **La persona titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión;**

c) **La persona titular de la Secretaría del Trabajo;**

d) ...

f) ...

...

...

Artículo 16.- La Junta de Gobierno se integrará por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:

I. **La persona titular del Ejecutivo del Estado**, quien lo presidirá;

II. **La persona titular de la Dirección General del Instituto**, quien tendrá el carácter de Secretario de la Junta; y

III. Cinco vocales, que serán:

a) **La persona titular de la Secretaría General de Gobierno;**

b) **La persona titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;**

c) **La persona titular de la Secretaría de Economía;**

d) La persona titular de la Secretaría de Educación;

e) La persona titular de la Secretaría de Salud; y

f) ...

...

...

...

TRANSITORIOS



ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a la fecha de presentación

ATENTAMENTE



DIPUTADO

BALTAZAR GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL FLORES SERNA

DIPUTADA

SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTIZ

DIPUTADO

MARIO ALBERTO SALINAS TREVIÑO

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARZA GARZA

DIPUTADO

**ARMANDO VÍCTOR GUTIÉRREZ
CANALES**

DIPUTADA
ROCÍO MAYBE MONTALVO ADAME

DIPUTADA
ANA MELISA PEÑA VILLAGÓMEZ

DIPUTADA
MARISOL GONZÁLEZ ELÍAS

DIPUTADA
PAOLA CRISTINA LINARES LÓPEZ

GRUPO LEGISLATIVO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. BALTAZAR GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVII LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 13 y 47 de la Ley que Crea el Cambio Climático del Estado de Nuevo León.

INICIADO EN SESIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2025

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor



**PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .**

Quienes suscriben, **Diputado Baltazar Gilberto Martínez Ríos**, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la **Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado**, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en sus artículos 86 y 87, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberanía, **iniciativa con proyecto de Decreto que reforma a los artículos 13 y 47 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Nuevo León**, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de septiembre de 2021, este Poder Legislativo aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, publicada el 02 de octubre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado, cuya vigencia inició a partir del 04 de octubre del mismo año.

Dicha Ley consta de 6 títulos, 55 artículos ordinarios y 12 artículos transitorios.

Entre las modificaciones más relevantes en comparación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de fecha 02 de octubre de 2009, abrogada, se destaca la estructura orgánica del Gabinete de la Administración Pública Estatal en ejercicio constitucional, a saber:

- a) **Gabinete del Gobernador**, integrado por la Oficina Ejecutiva, la Secretaría Particular, la Consejería Jurídica, la Gerencia de Proyectos, la Oficina de

Nuevo León en la Ciudad de México, el Sistema Estatal de Información y el Área de Comunicación.

- b) **Gabinete de Buen Gobierno**, conformado por las Secretarías de Finanzas y Tesorería General del Estado, Participación Ciudadana, Administración, Contraloría y Transparencia Gubernamental y Seguridad Ciudadana.
- c) **Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible**, del que forman parte las Secretarías de Economía, Trabajo, Desarrollo Regional y Agropecuario, Movilidad y Planeación Urbana, Igualdad e Inclusión, Educación, Salud, Mujeres y Cultura.

Luego entonces, con motivo de la reestructuración y reorganización del Gabinete Estatal, algunas Secretarías que se encontraban unidas, se dividieron competencialmente instituyéndose de manera individual, tal es el caso, de la Secretaría de Economía y del Trabajo; otras cambiaron su denominación, por ejemplo, las entonces, Secretarías de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Social se transformaron en la Secretarías de Medio Ambiente y de Igualdad e Inclusión, respectivamente.

Es así, que, con el propósito de evitar confusiones respecto a las nuevas denominaciones y funciones de las creadas Secretarías, los artículos quinto y sexto transitorios del referido Decreto 006, cuyos términos textuales son idénticos, señalan en su contenido:

"Las referencias, atribuciones, asuntos o funciones conferidas en otros ordenamientos jurídicos o instrumentos contenidos en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición que hagan mención a las Secretarías que con motivo del Presente Decreto se modifican, se entenderán hechas de la siguiente manera:

- a) Secretaría de Economía y Trabajo, por lo que hace a las facultades de Economía, a la Secretaría de Economía;*

- b) Secretaría de Economía y Trabajo, por lo que hace a las facultades de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo;*
- c) Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de igualdad e inclusión;*
- d) Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que hace a las facultades de medio ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente;*
- e) Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a la Secretaría de Desarrollo Regional;*
- f) Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que hace a las facultades de movilidad, transporte y desarrollo urbano, así como la Secretaría de infraestructura, a la Secretaría de Movilidad."*

Bajo este contexto, si bien, los dispositivos invocados abonan a la orientación interpretativa, lo cierto es, que este tipo de modificaciones normativas requieren de una homologación integral dentro de nuestro marco normativo, a fin de considerar plenamente cumplimentada la vertiente de seguridad y certeza jurídica del principio constitucional de legalidad.

Es entonces que proponemos la presente reforma a **Ley de Cambio Climático del Estado de Nuevo León**, con el objeto de homologar las referencias hechas hacia las distintas Secretarías que forman parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo con las descritas en la Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, publicada el 02 de octubre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado.

Para mayor comprensión, la modificación legislativa de mérito se ilustra de la siguiente manera:

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 13. La Comisión contará con un Secretario Técnico que dependerá de la Secretaría de Desarrollo Sustentable , sus	Artículo 13. La Comisión contará con un Secretario Técnico que dependerá de la Secretaría de Medio Ambiente , sus

facultades y atribuciones se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.	facultades y atribuciones se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 47. La Secretaría, en coordinación con las Secretaría de Infraestructura y de Desarrollo Social , elaborará la Norma Ambiental Estatal para la construcción de vivienda que considere la utilización de tecnología verde de ingeniería ambiental, así como de aprovechamiento de fuentes alternas de energía.	Artículo 47. La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Movilidad y Planeación Urbana y de Igualdad e Inclusión , elaborará la Norma Ambiental Estatal para la construcción de vivienda que considere la utilización de tecnología verde de ingeniería ambiental, así como de aprovechamiento de fuentes alternas de energía.

Expuesto lo anterior, sometemos ante Ustedes compañeros el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 13 y 47, de la Ley de Cambio Climático del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 13. La Comisión contará con un Secretario Técnico que dependerá de la Secretaría de **Medio Ambiente**, sus facultades y atribuciones se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 47. La Secretaría, en coordinación con las **Secretarías de Movilidad y Planeación Urbana y de Igualdad e Inclusión**, elaborará la Norma Ambiental Estatal para la construcción de vivienda que considere la utilización de tecnología verde de ingeniería ambiental, así como de aprovechamiento de fuentes alternas de energía.

TRANSITORIOS



ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a la fecha de presentación

ATENTAMENTE



DIPUTADO

BALTAZAR GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL FLORES SERNA

DIPUTADA

SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTIZ

DIPUTADO

MARIO ALBERTO SALINAS TREVIÑO

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARZA GARZA

DIPUTADO

**ARMANDO VÍCTOR GUTIÉRREZ
CANALES**

DIPUTADA

ROCÍO MAYBE MONTALVO ADAME

DIPUTADA

ANA MELISA PEÑA VILLAGÓMEZ

DIPUTADA

MARISOL GONZÁLEZ ELÍAS

DIPUTADA

PAOLA CRISTINA LINARES LÓPEZ

GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO